
Práctica administrativa canónica en materia de iglesias y lugares sagrados. La experiencia de la Iglesia en Italia y en la Diócesis de Roma

Canonical Administrative Praxis in relation to Churches and Places of Worship. Practical Experiences from the Church in Italy and in the Diocese of Rome

Antonio S. SÁNCHEZ-GIL

Profesor Encargado de Derecho del *munus sanctificandi*
Facoltà di Diritto Canonico. Pontificia Università della Santa Croce. Roma
assanchezil@pusc.it

Resumen: El artículo examina la actividad administrativa canónica en relación con los edificios y otros lugares de culto (iglesias, oratorios, capillas privadas y santuarios) en la praxis de la Iglesia en Italia, a partir de las normas del CIC y las instrucciones emanadas por la CEI. Después de analizar los elementos y efectos de la *deputatio ad cultum*, de la *reparatio iniuriae* y de la *reductio ad usus profanos*, se contempla la praxis tanto en materia de conciertos, visitas, exposiciones, etc., como en la concesión de licencias y aprobaciones que se refieren a lugares de culto. Atención particular se reserva al peculiar sistema italiano de «calificación jurídico-pastoral» de las iglesias, establecido por la CEI, y a los acuerdos previstos para encomendar o conceder el uso de una iglesia. Finalmente se describe la peculiar praxis de la Diócesis de Roma en la construcción de nuevas iglesias, confiada de modo exclusivo a la ORPF. En los anexos se ofrecen modelos de reglamentos y formularios empleados en Italia.

Palabras clave: edificios de culto, iglesias, oratorios, capillas, santuarios, construcción de iglesias.

Abstract: This paper explores canonical administrative activity in relation to buildings and other places of worship (churches, oratories, private chapels and sanctuaries) in church praxis in , based on CIC rules and instructions issued by the Italian episcopal conference. In light of an analysis of the elements and effects of *deputatio ad cultum*, *reparatio iniuriae* and *reductio ad usus profanos*, the praxis with regard to concerts, tours, exhibitions, etc. is addressed, as well as the award of licenses and approvals relating to places of worship. The Italy-specific system enabling the «juridical-pastoral description» of churches established by the Italian episcopal conference is a particular focus of inquiry, along with agreements drafted to commend or concede the use of a church. Finally, the praxis governing the construction of new churches in the Diocese of Rome, which is entrusted exclusively to the ORPF, is discussed. The appendices comprise a set of model forms and regulations used in Italy.

Keywords: places of worship, churches, oratories, chapels, sanctuaries, construction of new churches.

1. CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS

El estudio de la práctica administrativa de la Iglesia en materia de iglesias y lugares sagrados comprende el análisis, desde el punto de vista de la praxis, de aquellos actos y funciones que la Administración eclesiástica y, eventualmente, otros sujetos jurídicos pueden o deben realizar en relación con las iglesias y lugares sagrados de la Iglesia católica. Se trata, como se verá, de actos y funciones de naturaleza muy diversa (patrimonial, administrativa, pastoral, litúrgica, técnica, artística, cultural, económica, etc.¹), en los que pueden intervenir sujetos también muy diversos (la autoridad eclesiástica, la persona física o jurídica responsable del culto, la persona física o jurídica propietaria de la iglesia o de lugar sagrado –privada o pública, eclesiástica o civil–, los simples fieles, la autoridad civil, etc.), que tienen, sin embargo, en común la producción de efectos jurídicos, primariamente en el ámbito canónico, pero también en el ámbito civil, de acuerdo con las leyes de cada Estado.

Es útil recordar, en este sentido, que en la praxis canónica sobre iglesias y lugares sagrados deben ser tenidas en cuenta, de modo coordinado y según su jerarquía, todas las fuentes del derecho que se refieren a la materia, sin olvidar el oportuno respeto de los legítimos usos y tradiciones locales. Concretamente constituyen fuentes del derecho en materia de iglesias y lugares sagrados las normas canónicas universales y particulares –en el plano de la Conferencia Episcopal o en el provincial o diocesano– y las normas concordatarias y estatales en materias relacionadas (tutela de la libertad religiosa, reconocimiento civil de los entes eclesiásticos, cuestiones patrimoniales, administración de bienes, contratos, normas urbanísticas, etc.), así como las costumbres locales canónicas y civiles.

1.1. *Una doble opción metodológica*

En atención a la extensión de la materia y, sobre todo, a su carácter contingente –por definición la práctica administrativa canónica no puede ser es-

¹ A propósito de la variedad de actos que pueden afectar a una iglesia piénsese, por ejemplo, en el consentimiento escrito del Obispo para su construcción (acto de naturaleza administrativa motivado por razones pastorales y con importantes implicaciones patrimoniales y económicas), o en su dedicación (acto de naturaleza litúrgica con efectos canónicos y civiles), o en su restauración (acto de naturaleza técnica o artística o litúrgica, según se trate de elementos arquitectónicos estructurales o artísticos o propiamente litúrgicos, con relevantes implicaciones económicas), o en la realización en ella de un concierto o de una exposición (acto de naturaleza artística y cultural con relevancia religiosa), etc.

tudiada en abstracto, sino en concreto, mediante el examen de una praxis determinada, realmente existente— he considerado necesario realizar una doble opción metodológica. De un lado, he juzgado oportuno limitar la exposición a algunas categorías de lugares sagrados, concretamente a los edificios y a los otros lugares de culto² —es decir, las iglesias, los oratorios, las capillas privadas y los santuarios³—, dejando fuera de nuestro estudio los otros lugares sagrados mencionados en las normas canónicas (como los altares, los cementerios y las sepulturas) o litúrgicas (como el sagrario, el ambón, el baptisterio, el confesionario, etc.). Por otro lado, he considerado preferible, más que ofrecer una panorámica de la praxis en distintos países —que hubiera debido ser necesariamente sintética—, examinar la práctica administrativa canónica de una sola nación —concretamente Italia—, y dedicar, dentro de ella, una atención especial a la experiencia particular de una sola diócesis —en concreto la Diócesis de Roma y su peculiar praxis en la construcción de nuevas iglesias—. Una opción, fundada inicialmente en el simple hecho de residir en Italia y en Roma y de disponer, por tanto, de información directa de estos lugares, que ha sido, sin embargo, sucesivamente corroborada por una razón propiamente científica. En efecto, después de haber examinado la práctica de la Iglesia en Italia y en Roma en esta materia, estoy persuadido del valor, en cierta medida, ejem-

² Acerca de la expresión «edificios o lugares de culto», ausente en la normativa canónica universal —que habla en cambio de «edificios y lugares sagrados»—, pero frecuente en las normas concordatarias, en las leyes civiles y en algunas normativas canónicas particulares, así como en la normativa litúrgica, cfr. A. ACQUAVIVA, *Gli «edifici» e i «luoghi» del culto tra Stato, Chiesa cattolica e confessioni di minoranza*, Roma 2009, 88-92; B. F. PIGHIN, *Configurazione e gestione dei luoghi di culto*, en AA. VV., *Enti ecclesiastici e controllo dello Stato. Studi sull'Istruzione CEI in materia amministrativa*, a cargo de J. I. Arrieta, Venezia 2007, 117-138; M. CALVI, *L'edificio di culto è un «luogo sacro»? La definizione canonica di «luogo sacro»* en Quaderni di diritto ecclesiale 13 (2000) 228-247.

³ Como se recordará, en la vigente normativa canónica, se entiende por “iglesia” «un edificio sagrado destinado al culto divino, al que los fieles tienen derecho a entrar para la celebración, sobre todo pública, del culto divino» (c. 1214 CIC); por “oratorio” «un lugar destinado al culto divino con licencia del Ordinario, en beneficio de una comunidad o grupo de fieles que acuden allí, al cual también pueden tener acceso otros fieles, con el consentimiento del Superior competente» (c. 1223 CIC); por “capilla privada” «un lugar destinado al culto divino, con licencia del Ordinario del lugar en beneficio de una o varias personas físicas» (c. 1226 CIC); y por “santuario” «una iglesia u otro lugar sagrado al que, por un motivo peculiar de piedad, acuden en peregrinación numerosos fieles, con aprobación del Ordinario del lugar» (c. 1230 CIC). En adelante se empleará la expresión «edificio de culto» como equivalente a iglesia y otros «lugares de culto» para referirse a los oratorios, a las capillas privadas y a los santuarios que no son iglesias.

plar que tal praxis puede tener para la Iglesia en otros países y, concretamente, en España.

En este sentido, se debe señalar que la Iglesia en Italia, a partir de la experiencia acumulada en sus relaciones con el Estado, desde la unificación del Reino de Italia en 1861 y el fin de los Estados Pontificios en desarrollado en los últimos tiempos –sobre todo a partir del nuevo Código de Derecho Canónico de 1983 [= CIC] y del Acuerdo para la revisión del Concordato lateranense (de 1929) entre la Santa Sede y la República italiana del 18 de febrero de 1984 [= Acuerdo⁴]– un completo sistema de praxis administrativa en materia de edificios y lugares de culto, concretado en la *Istruzione in materia amministrativa*, emanada por la Conferencia Episcopal Italiana [= CEI] el 1 de abril de 1992, actualizada posteriormente el 1 de septiembre de 2005 [= IMA⁵]. Un sistema renovado, pero confirmado por una experiencia de casi dos décadas, que por sus características técnicas puede ser tomado como modelo por otras Conferencias Episcopales –como, por ejemplo, la española–, que aún no han desarrollado indicaciones específicas en la materia, que puedan servir de orientación a la normativa diocesana. Asimismo la praxis de la Diócesis de Roma, dotada –como veremos– de un específico ente con competencia exclusiva en materia de nuevas iglesias, puede también constituir un modelo inspirador para la praxis de otras diócesis, tanto en Italia como en otras naciones.

1.2. *Delimitación de la materia de estudio*

Tomando, pues, como puntos de referencia las disposiciones canónicas universales y las disposiciones particulares de la Iglesia en Italia, así como las

⁴ *Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana che apporta modificazioni al Concordato lateranense*, 18 febrero 1984, en AAS 77 (1985) 521-531; *Protocollo addizionale*, 18 febrero 1984, *ibidem*, 532-535; *Protocollo*, 15 noviembre 1984, *ibidem*, 536-537; *Allegati*, 15 noviembre 1984, *ibidem*, 538-544; *Processo-Verbale*, 3 junio 1985, *ibidem*, 545-546.

⁵ CEI, *Istruzione in materia amministrativa*, 1 septiembre 2005, en Notiziario CEI 31 (2005) 325-427. Promulgada mediante *Decreto* del Presidente de la CEI (en Notiziario CEI 31 [2005] 329), después de ser aprobada por la Asamblea General con mayoría absoluta, «a sus determinaciones, aunque no sean jurídicamente vinculantes, cada Obispo se atenderá en relación con la unidad y el bien común, a no ser que razones de especial relieve lo disuadan, a su juicio, de su adopción en la propia diócesis» (art. 18 *Statuti della CEI*, Notiziario CEI 26 [2000] 257-280). (La traducción española de éste y otros textos italianos es mía). En este sentido se trata de un texto que ofrece indicaciones comunes, útiles para instaurar una praxis común en materia administrativa. Cfr. M. RIVELLA, *L'Istruzione in materia amministrativa 2005 della Conferenza Episcopale Italiana*, en *Ius Ecclesiae* 18, (2006), 187-197; J. MINAMBRES, *Evoluzione nella prassi amministrativa della Chiesa in Italia: dalla «Istruzione in materia amministrativa» del quella del 2005*, en *ibidem*, 199-216.

disposiciones concordatarias y estatales vigentes en Italia, examinaremos, desde el punto de vista de la práctica administrativa canónica, los actos y funciones que se refieren a las iglesias y demás lugares de culto, analizando tanto sus elementos constitutivos y sus consecuencias jurídicas –canónicas y civiles– como su concreta realización en la praxis de la Iglesia en Italia⁶. Conviene señalar que la mayor parte de estos actos y funciones son objeto de la normativa del CIC y tienen, por tanto, carácter universal, aunque nosotros los examinaremos según el modo propio en que se realizan en Italia; otros están determinados por las disposiciones particulares de la CEI y son, en consecuencia, específicos de la praxis italiana.

Entre los primeros destaca por su importancia la *deputatio ad cultum*: acto de la autoridad eclesiástica, realizado mediante la dedicación o la bendición (cfr. cc. 1205-1207 CIC), que es origen y fundamento del peculiar régimen jurídico de las iglesias y demás lugares de culto; y merece por tanto una atención especial. También son importantes, por referirse, como el anterior, a todos los lugares de culto: la *reparatio iniuriae*: acto de la comunidad cristiana, realizado mediante un rito penitencial, en caso de violación del edificio o lugar de culto (cfr. c. 1211 CIC); la *reductio ad usus profanos*: de hecho o mediante un acto de la autoridad eclesiástica, que comporta la pérdida de la dedicación o de la bendición (cfr. c. 1212 CIC); y, más en general, los actos que la autoridad eclesiástica realiza en el libre ejercicio de sus poderes y funciones sobre los lugares de culto (cfr. c. 1213 CIC), entre los que merece una mención particular la autorización del Ordinario, en casos concretos, de usos diversos al culto, siempre que no sean contrarios a la santidad del lugar (cfr. c. 1210 CIC).

De menor importancia, pero también objeto de la normativa universal, son los siguientes actos y funciones relativos, unas veces, a las iglesias, otras

⁶ De especial utilidad para nuestro estudio ha sido también el vademécum, preparado por los ecónomos de las principales diócesis italianas: ECONOMI DELLE GRANDI DIOCESI, *La gestione e l'amministrazione della parrocchia*, a cargo de P. Clementi y L. Simoncelli, Bologna 2008. En él se recoge la experiencia de las curias diocesanas italianas, constituyendo –con palabras de Mons. Mauro Rivella, Subsecretario de la CEI y entonces Director del *Ufficio Nazionale per i problemi giuridici*– «una extensión y una traducción en la praxis de los principios contenidos en la *Instrucción en materia administrativa*. El texto (...) nace de la experiencia concreta y mantiene un carácter de ejemplaridad, pero no quiere ni puede ocupar el lugar del derecho particular y de las disposiciones diocesanas, pretendiendo más bien favorecer la adopción sobre el territorio nacional de praxis virtuosas, con el fin de favorecer una correcta administración de los recursos confiados a nuestras Iglesias para su misión de evangelización y de testimonio» (*Premessa*, en *ibidem*, V).

veces, a los oratorios, a las capillas privadas o a los santuarios: el consentimiento escrito del Obispo diocesano para la construcción de una iglesia (cfr. c. 1215 CIC); la debida vigilancia y cuidado de la iglesia, a cargo del responsable de la misma (cfr. c. 1220 CIC); la licencia para la constitución de un oratorio por parte del Ordinario y su autorización para que, sucesivamente, pueda ser destinado a usos profanos (cfr. cc. 1223-1225 CIC); la licencia para la constitución de una capilla privada y la sucesiva licencia para que en ésta puedan celebrarse la Santa Misa u otras funciones sagradas, ambas a cargo del Ordinario del lugar (cfr. cc. 1226 y 1228 CIC); la licencia del Ordinario del lugar para que pueda conservarse la Eucaristía en otras iglesias, oratorios y capillas –diversas a la iglesia catedral o equiparada, a la iglesia parroquial o a la iglesia u oratorio anejos a la casa de un instituto religioso o sociedad de vida apostólica, o a la capilla privada del Obispo– (cfr. c. 934 § 1 CIC); y la aprobación de un santuario y de su estatuto, por parte de la autoridad competente (cfr. cc. 1230-1232 CIC) y la eventual concesión de privilegios (cfr. c. 1234 CIC).

Entre los actos señalados por las indicaciones de la CEI destacan por su importancia y por su originalidad desde el punto de vista canónico: la «calificación jurídico-pastoral» de la iglesia, acto que compete realizar al Obispo diocesano (cfr. IMA, nn. 120-121) y tiene por objeto la determinación de la función pastoral de la iglesia y de la persona responsable de la misma, tanto en materia pastoral y litúrgica, como en materia administrativa (cfr. IMA, nn. 125 y 128); y el «acuerdo» o convenio, previsto en ciertos casos, sobre el uso de una iglesia (cfr. IMA, nn. 122, 125, 135 y 138).

2. LA *DEPUTATIO AD CULTUM*, ORIGEN Y FUNDAMENTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS IGLESIAS Y DEMÁS LUGARES DE CULTO, EN EL CIC Y EN LAS DISPOSICIONES DE LA CEI

Entre todos los actos y funciones contemplados por la normativa canónica en materia de lugares sagrados destaca sin duda, por su fundamental relevancia no sólo canónica sino también civil, la «destinación al culto divino o a la sepultura de los fieles» (*deputatio ad divinum cultum fideliumve sepulturam*) de un determinado lugar. Un acto que, según el c. 1205 CIC, se realiza «mediante la dedicación o bendición prescrita por los libros litúrgicos», y que tiene como efecto la constitución –o transformación– de un determinado lugar en «lugar sagrado», quedando desde entonces destinado al culto divino o a la sepultura de los fieles. Dejando de lado, como se ha dicho anteriormente, la *deputatio ad sepulturam*, que tiene características

específicas propias, centraremos nuestra atención en la *deputatio ad cultum divinum* –o simplemente *deputatio ad cultum*–, es decir el acto, constituido por elementos jurídicos y litúrgicos, por el que un lugar se destina al culto y queda constituido como lugar sagrado, siendo en adelante «admitido» en éste sólo «aquello que favorece el ejercicio y el fomento del culto, de la piedad y de la religión», y “prohibido” «lo que no esté en consonancia con la santidad del lugar», según las palabras del c. 1210 CIC; que, en relación con los usos admitidos recientemente indicados, establece que «sin embargo, el Ordinario puede permitir, en casos concretos, otros usos, siempre que no sean contrarios a la santidad del lugar».

2.1. *Autoridad competente y efectos litúrgicos y pastorales*

Conforme a su naturaleza eminentemente eclesial y en atención a la forma litúrgica con que concretamente se realiza, la *deputatio ad cultum* es competencia exclusiva de la autoridad eclesiástica. No es, por tanto, suficiente que el propietario, u otras personas que tengan a su disposición el edificio o el lugar de que se trate, decidan destinarlo al culto o que se destine de hecho al culto. Según la vigente normativa canónica, la *deputatio ad cultum* puede ser realizada, en el ámbito del propio territorio, por el Obispo diocesano y por aquellos que se le equiparan por el derecho, si se trata de la «dedicación» de una iglesia o de otro lugar o de la «bendición» de una iglesia, y, en el ámbito de su propia jurisdicción, por el Ordinario, si se trata de la «bendición» de un lugar sagrado diverso a la iglesia (cfr. cc. 1206-1207 CIC). Acerca de la razón de tal reserva a la autoridad eclesiástica, y, más en concreto, de la reserva al Obispo diocesano de la *deputatio ad cultum* de una iglesia, la CEI señala que la destinación de un edificio al culto público compete al Obispo diocesano, por el hecho de que «la liturgia puede ser legítimamente celebrada sólo en comunión con él y bajo su autoridad (cfr. cc. 838 y 899 § 2 CIC)» (IMA, n. 120).

Evidentemente tanto la dedicación como la bendición, mediante las cuales se cumple de manera efectiva la *deputatio ad cultum*, son actos de naturaleza litúrgica que pueden ser celebrados eventualmente por un ministro sagrado distinto del Obispo diocesano y de los equiparados por el derecho, o distinto del Ordinario competente. Sin embargo es importante observar que, en este caso, tal ministro no debe realizar la dedicación o la bendición –serían ilegítimas– si no ha recibido el encargo o el mandato del Obispo diocesano o del Ordinario competente; es decir, si no se ha producido previamente la destinación en sentido jurídico, que podríamos denominar *deputatio canonica*, que es,

en cambio, un acto singular de naturaleza administrativa, propio de quien tiene en la Iglesia potestad ejecutiva ordinaria (cfr. c. 134 CIC)⁷.

En efecto, si bien la celebración litúrgica de la dedicación puede ser encomendada a otro Obispo o, en casos excepcionales, a un presbítero, mediante mandato especial y explícito, y la celebración de la bendición puede ser delegada a otro sacerdote, como permiten las normas canónicas y litúrgicas⁸, la previa *deputatio canonica* corresponde a la autoridad eclesiástica competente, que puede cumplir personalmente, celebrando él mismo el acto litúrgico de dedicación o bendición, o mediante un acto –en este caso de naturaleza administrativa– con el que encomienda la celebración litúrgica a otro Obispo o a un sacerdote. Dependerá del tipo de lugar sagrado de que se trate (iglesia catedral o iglesia parroquial, oratorio o capilla privada, santuario, etc.) la mayor o menor solemnidad del acto litúrgico que debe celebrarse –la dedicación o la bendición⁹– y si debe realizarla un Obispo o puede encomendarse a un presbítero, así como el alcance de sus consecuencias tanto en el ámbito litúrgico y pastoral, como en el orden canónico y civil.

Acerca de los efectos litúrgicos y pastorales del legítimo cumplimiento de la *deputatio ad cultum* de un lugar –y su consiguiente transformación en «lugar sagrado» destinado al culto– la misma normativa canónica establece que «en la iglesia legítimamente dedicada o bendecida pueden realizarse todos los actos del culto divino, sin perjuicio de los derechos parroquiales» (c. 1219 CIC) y que «en los ora-

⁷ En este sentido, Martín de Agar señala: «dos son los elementos jurídicos que constituyen un lugar en *sagrado*: a) el destino del lugar al culto o a sepultura, hecho por la autoridad competente; y b) la dedicación o bendición litúrgica. Estos elementos, si bien están conectados, pueden considerarse de algún modo independientes en cuanto puede darse el primero sin el segundo, no al revés (cfr. *Communicationes* 12 [1980] 339), pero sólo cuando se den los dos el lugar se considera *sagrado*» (*Comentario al c. 1205*, en AA.VV., *Código de Derecho Canónico. Edición anotada*, a cargo de P. Lombardía y J.I. Arrieta, Pamplona 1984, 722-723). Cfr. también A. LONGHITANO, *Comentario al c. 1205*, en AA.VV., *Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico*, a cargo de A. Marzoa, J. Miras y R. Rodríguez-Ocaña, Pamplona 1996, III, 1796-1800.

⁸ Cfr. cc. 1169 y 1206-1207 CIC; PONTIFICALE ROMANUM, *Ordo dedicationis ecclesiae et altaris*, In Civitate Vaticana 1994, II, 6 y IV, 2. Acerca de «las iglesias en las que se celebra y se conserva la santísima Eucaristía», el Directorio para los Obispos *Apostolorum Successores* [= AS] señala que «no son simples lugares de reunión para los fieles, sino la morada de Dios y símbolo de la Iglesia que se encuentra en aquel lugar. Porque son lugares destinados permanentemente al culto de Dios, el Obispo debe celebrar en forma solemne *el rito de la dedicación* o favorecer que lo haga otro Obispo o, en casos excepcionales, un sacerdote» (n. 154).

⁹ Por ejemplo, el c. 1217 § 2 CIC establece que se “dediquen” «con rito solemne las iglesias, sobre todo las catedrales y parroquiales».

torios legítimamente constituidos pueden realizarse todas las celebraciones sagradas, a no ser las exceptuadas por el derecho, por prescripción del Ordinario del lugar, o que lo impidan las normas litúrgicas» (c. 1225 CIC). También se señalan las diferencias, por otra parte evidentes, entre la función pastoral de una iglesia, y la de un oratorio o de una capilla privada (cfr. cc. 1214, 1221, 1223 y 1226 CIC)¹⁰.

2.2. *Relevancia canónica y civil en Italia*

A propósito de la relevancia canónica y civil en Italia de la *deputatio ad cultum*, la CEI señala: «La libertad de ejercicio público del culto es un derecho tutelado a nivel constitucional (cfr. art. 19 Const.) y el régimen de las iglesias destinadas al culto católico está establecido por las normas concordatarias (cfr. arts. 2, 5 y 7 del Acuerdo del 18 de febrero de 1984). El art. 2 del Acuerdo dispone: «En particular se asegura a la Iglesia la libertad de organización, de público ejercicio del culto, de ejercicio del magisterio y del ministerio espiritual...», de acuerdo con el c. 1213 CIC, según el cual «la autoridad eclesiástica ejerce libremente sus poderes y funciones en los lugares sagrados». El art. 5 del Acuerdo prevé algunas hipótesis taxativas en presencia de las cuales es necesario un concierto entre el Estado italiano y la autoridad eclesiástica: 1º) Los edificios abiertos al culto no pueden ser requisados, ocupados, expropiados o demolidos si no es por graves razones y previo acuerdo con la competente autoridad eclesiástica. 2º) Salvo los casos de urgente necesidad, la fuerza pública no podrá entrar, para el ejercicio de sus funciones, en los edificios abiertos al público, sin haber dado previo aviso a la autoridad eclesiástica» (IMA, n. 124).

En el mismo contexto la CEI añade: «La tutela de la destinación al culto y la reserva de las correspondientes facultades a la autoridad eclesiástica competente por el territorio constituye una constante de la legislación estatal, que garantiza la inmutabilidad de la destinación al culto (cfr. art. 831, *comma secondo*, cod. civ.) hasta que no haya sido dispuesta por la autoridad eclesiástica la reducción a un uso profano del edificio de culto, a tenor del c. 1222 CIC» (*ibidem*)¹¹. Una disposición de la mayor importancia por la que el derecho civil

¹⁰ Vid. *supra* nota 3.

¹¹ El citado art. 831, *comma secondo*, del *Codice civile* italiano establece en concreto: «*Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano*». Para un estudio de esta disposición, cfr. A. BETTETINI, *Gli enti e i beni ecclesiastici. Art. 831*, Milano 2005; C. MINELLI, *La rilevanza giuridica della «Deputatio ad cultum» (art. 831 Codice Civile)*, en AA.VV., *Enti ecclesiastici e controllo dello Stato*, cit., 257-271.

italiano asume la normativa canónica en la materia, subrayando de manera inmejorable la relevancia civil de la *deputatio ad cultum*, mediante el reconocimiento de la competencia exclusiva de la autoridad eclesiástica sobre los edificios destinados al ejercicio público del culto católico. Lo que, en línea de principio, comporta la aplicación y la tutela, exigible también civilmente, de algunas interesantes indicaciones de la CEI sobre las consecuencias canónicas de la *deputatio ad cultum*.

Concretamente, la afirmación de que «la dedicación de una iglesia al culto público es un hecho permanente no susceptible de fraccionamiento en el espacio o en el tiempo, tal que consienta actividades diversas al culto mismo. Esto equivaldría en efecto a violar el vínculo de destinación, tutelado por el art. 831 cod. civ.» (IMA, n. 128). En consecuencia, «la iglesia debe estar en la exclusiva disponibilidad de la persona jurídica competente para la celebración de culto y por tanto no puede ser objeto de un contrato que atribuya a terceros derechos, facultades, poderes, posesión o coposesión sobre el edificio de culto; no puede ser bien instrumental para actividades comerciales, ni puede ser utilizada en modo alguno para fines de lucro» (*ibidem*). Asimismo la CEI precisa que «la responsabilidad pastoral de la iglesia compete al rector; la responsabilidad administrativa corresponde al rector, si la iglesia tiene personalidad jurídica, de otro modo, al ente eclesiástico del que la iglesia depende» (*ibidem*)¹².

Todo lo cual se aplica, y es también de la mayor importancia, no sólo al espacio en el que concretamente se realizan los actos de culto, sino a todo lo que, según las indicaciones de la CEI, en conformidad con las normas civiles italianas, debe ser considerado como “pertenencias de los edificios de culto”: «Son pertenencias las cosas destinadas de modo duradero al servicio o al ornamento de otra cosa. La destinación puede ser efectuada por el propietario de la cosa principal o por quien tiene un derecho real sobre la misma (art. 817 cod. civ.). Las pertenencias siguen el mismo régimen de la cosa principal. Se consideran ordinariamente pertenencias de la iglesia la sacristía, el campanario, la zona de la entrada [en italiano: *sagrato*], los locales utilizados como oficina o como vivienda de los sacerdotes y de las personas dedicadas al culto, así como aquellos usados para las obras pastorales anejas a la iglesia y al culto que en ella se celebra (cfr. Consiglio di Stato, Sezione Prima, *Parere* 18 octubre 1989, n. 1236/89)» (IMA, n. 126).

¹² A este propósito, vid. *infra* 5, sobre las actuaciones de la autoridad eclesiástica en el libre ejercicio de sus poderes y funciones sobre los lugares de culto, y 7.1, sobre la calificación jurídico-pastoral de una iglesia.

2.3. *La prueba de la deputatio ad cultum*

Como es natural, la *deputatio ad cultum* de un edificio o lugar determinado por parte del Obispo diocesano o del Ordinario no excluye sino más bien presupone la previa intervención de aquellas otras personas (físicas o jurídicas, privadas o públicas, eclesiásticas o civiles) que tengan según diverso título el derecho de disposición sobre el edificio o lugar de que se trate y decidan legítimamente destinarlo al culto divino. Tratándose de un acto de disposición particularmente intenso –porque mediante su transformación en lugar sagrado, ese determinado bien patrimonial quedará sujeto de modo permanente a la autoridad eclesiástica, la cual ejercerá en él libremente sus poderes y funciones (cfr. c. 1213 CIC)– es de gran importancia que la voluntad del propietario, expresa o tácita, pueda ser probada, tanto a los efectos canónicos como civiles¹³.

En este sentido, la CEI señala que pueden ser inscritos como propietarios en los registros inmobiliarios un ente eclesiástico, un ente público, una persona privada o una persona física (cfr. IMA, n. 125). Precisa, sin embargo, que «en el caso de que el sujeto propietario sea una persona física o un ente civil, éste no puede sustraer el edificio a la destinación al culto, ni puede gestionar directamente el mismo culto, dado el principio de que el sujeto que celebra la liturgia puede ser solamente una comunidad de fieles en comunión con el Obispo diocesano. El propietario está por tanto obligado a conceder el uso del edificio, a título de ejercicio del culto, al ente eclesiástico designado por el Obispo. Las condiciones de la concesión pueden ser determinadas mediante convención» (*ibidem*).

En atención a las relevantes consecuencias que comporta la *deputatio ad cultum* realizada por la autoridad eclesiástica es necesario que pueda probarse. A este respecto, la normativa canónica establece que «se ha de levantar acta de la dedicación o bendición de una iglesia» y que «se guardará un ejemplar en la curia diocesana, y otro en el archivo de la iglesia» (c. 1208 CIC); lo que no excluye, obviamente, que sea también muy oportuno levantar acta de la

¹³ Sobre la relevancia civil del consentimiento del propietario del lugar para su destinación al culto, interesa señalar una resolución de la Corte suprema italiana que declara: «Para que la provisión constitutiva eclesiástica de la “deputatio ad cultum” (...) produzca efectos civiles, es necesario el consentimiento, expreso o tácito, del propietario para la destinación de la cosa al específico uso religioso» (Cass. civ., sez. I, 16 marzo 1981, n. 1474, en G. P. MONTINI, *La cessazione degli edifici di culto*, en Quaderni di diritto ecclesiale 13 [2000] 281-299; cfr. nota 56 de su artículo, donde reenvía a M. PETRONCELLI, *Edifici di culto cattolico*, en *Enciclopedia del diritto*, XIV, Milano 1965, 297-311).

dedicación o bendición de otros lugares de culto; como de hecho se hace en la práctica en Italia en el caso de la bendición de los oratorios y de las capillas privadas¹⁴. En ausencia de tal documento, la misma ley canónica señala que «la dedicación o bendición de un lugar, con tal de que no perjudique a nadie, se prueban suficientemente por un solo testigo libre de toda sospecha» (c. 1209 CIC). De todo ello, así como de los actos que hayan precedido la dedicación o la bendición, tanto por parte del propietario como de la autoridad eclesiástica, es oportuno que quede constancia en los archivos de la curia¹⁵.

3. LA *REPARATIO INIURIAE* EN CASO DE PROFANACIÓN DE UN LUGAR DE CULTO

En el caso –por desgracia no infrecuente en la historia de la Iglesia, también en nuestros días– de que en un lugar de culto se cometan delitos que, según la descripción del Ceremonial de Obispos, supongan una «grave injuria a los sagrados misterios, sobre todo a las especies eucarísticas», o se cometan otras acciones «en desprecio de la Iglesia, o que ofenden gravemente la dignidad del hombre y de la sociedad humana»¹⁶, las normas canónicas y litúrgicas establecen que se realice la oportuna *reparatio iniuriae*, mediante la celebración de un rito penitencial.

La vigente normativa canónica prevé la necesaria intervención del Ordinario del lugar, a quien corresponde valorar la naturaleza y las consecuencias de lo sucedido –en particular, el escándalo provocado en los fieles– y juzgar si los actos injuriosos han sido de «tal gravedad» y «tan contrarios a la santidad del lugar» que sea oportuno suspender el ejercicio del culto hasta que se repare la injuria (cfr. c. 1211 CIC). Por su parte, las leyes litúrgicas establecen que «a la injuria causada a una iglesia se debe poner remedio lo más rápidamente posible con un rito penitencial» y que «hasta que tal rito no haya sido realizado, no se celebren en ella ni la eucaristía, ni los demás sacramentos o ritos litúrgicos»¹⁷. También señalan la conveniencia de que el rito penitencial sea pre-

¹⁴ Cfr. Anexo 4. *Licencia para la constitución de un oratorio*; y Anexo 5. *Licencia para la constitución de una capilla privada*.

¹⁵ Si se trata de una nueva iglesia, la decisión del Obispo diocesano de dedicar al culto el nuevo edificio –lo que antes hemos denominado *deputatio canonica*, previa a la dedicación litúrgica– puede considerarse implícita en el consentimiento, dado por escrito, para su construcción (cfr. Anexo 3. *Licencia para la construcción de una iglesia*).

¹⁶ Cfr. *Caerimoniale Episcoporum*, In Civitate Vaticana 1985, n. 1070.

¹⁷ *Ibidem*, n. 1071, en donde se contienen además algunas indicaciones pastorales para estos casos: «Es verdaderamente oportuno preparar los ánimos de los fieles al rito penitencial con

sidido por el Obispo diocesano, el cual, junto al rector de la iglesia, establecerá si se debe cumplir la celebración del Sacrificio eucarístico o una Liturgia de la Palabra¹⁸.

En consecuencia, desde el punto de vista de la praxis, es necesario que la noticia de una acción injuriosa cometida en un lugar de culto sea inmediatamente comunicada al Ordinario del lugar, a quien corresponde tomar personalmente la decisión oportuna. En este sentido conviene distinguir el acto de la autoridad eclesiástica, de naturaleza administrativa y pastoral, que puede revestir modalidades diversas (un decreto, una carta, una declaración, una visita personal o de un delegado, etc.), en el que se establece lo que debe hacerse, y la *reparatio iniuriae*, acto de naturaleza litúrgica que debe celebrarse en el lugar de culto que ha sido profanado, en el que interviene toda la comunidad cristiana, «de la que el edificio sagrado es signo e imagen»¹⁹.

Aparte de hechos sucedidos recientemente en España de todos conocidos²⁰, me parece útil citar dos casos acaecidos en Roma. En primer lugar, el suicidio de un anciano en la Basílica de San Pedro el 26 de agosto de 1999. El Arcipreste de la Basílica, el Cardenal Virgilio Noè, si bien consideró que no se había tratado propiamente de una «deliberada profanación del templo», ni de un «acto sacrílego en sí», sino de un «gesto desesperado», en atención al lugar en que se había cometido, estableció que al día siguiente fuera celebrada por el párroco de San Pedro, en el Altar de la Cátedra, una Misa de reparación. En segundo lugar, la profanación y destrucción de un Crucifijo y de una estatua de la Virgen, situados en los locales de la iglesia de los Santos Marcelino

la predicación de la palabra de Dios y con píos ejercicios; y mejor todavía proponerles la renovación interior mediante la celebración del sacramento de la penitencia». También se precisa que, hasta que se cumpla la reparación, «en signo de penitencia el altar permanezca sin manteles y se elimine todo signo que habitualmente sirve para expresar alegría: luces encendidas, flores y otras cosas por el estilo» (*ibidem*).

¹⁸ *Ibidem*, n. 1072. Si el lugar de culto profanado es una iglesia, se recomienda una celebración eucarística (cfr. *ibidem*, n. 1075), en la que los sacerdotes presentes concelebran con el Obispo, especialmente aquellos que ejercitan su oficio pastoral en la iglesia que ha sufrido la profanación (cfr. *ibidem*, n. 1076). Sobre el modo en que debe desarrollarse la celebración, cfr. *ibidem*, nn. 1075-1091.

¹⁹ *Ibidem*, n. 1070.

²⁰ Por ejemplo la profanación de la capilla universitaria de Somosaguas, el 10 de marzo de 2011, mediante la invasión de un numeroso grupo de jóvenes que realizaron conductas obscenas y blasfemas alrededor del altar. El Arzobispo de Madrid, el Cardenal Antonio María Rouco Varela, decidió que fuera celebrada por uno de sus Obispos auxiliares una Misa de reparación que tuvo lugar el 18 de marzo siguiente.

y Pedro, el 15 de octubre de 2011. De acuerdo con el Vicario de Roma, el Cardenal Agostino Vallini, el párroco estableció que se rezara un Santo Rosario de reparación durante toda la semana siguiente a los hechos.

4. LA *REDUCTIO AD USUS PROFANOS* DE UN LUGAR DE CULTO

A diferencia de la profanación, que puede comportar, a juicio del Ordinario del lugar, la suspensión temporal del ejercicio del culto, la *reductio ad usus profanos* implica la pérdida definitiva de la destinación al culto del lugar que ha sido dedicado o bendecido. Como es sabido, la normativa canónica trata de la reducción a usos profanos en tres disposiciones más bien generales que dejan amplio margen de determinación al derecho particular y a la praxis.

En la primera, se establece, con carácter general, que «los lugares sagrados pierden su dedicación o bendición si resultan destruidos en gran parte o si son reducidos permanentemente a usos profanos por decreto del Ordinario o de hecho» (c. 1212 CIC). Una disposición preponderantemente ritual, en la que, sin entrar a valorar los hechos –voluntarios o no– que han determinado la destrucción o la reducción permanente a usos profanos, establece como consecuencia la pérdida de la dedicación o bendición²¹. En la segunda, se establece, que «si una iglesia no puede emplearse en modo alguno para el culto divino y no hay posibilidad de repararla, puede ser reducida por el Obispo diocesano a un uso profano no sórdido» (c. 1222 § 1 CIC). En este caso, referido explícitamente a una iglesia, la *reductio ad usus profanos* es consecuencia de una decisión que corresponde tomar personalmente al Obispo diocesano, mediante un acto administrativo –normalmente en forma de decreto–, siempre que se haya constatado, mediante el oportuno procedimiento, tanto la imposibilidad del empleo de la iglesia para el culto, como la imposibilidad de su reparación. En la tercera, se establece, que «cuando otras causas graves aconsejen que una iglesia deje de emplearse para el culto divino, el Obispo diocesano, oído el consejo presbiteral, puede reducirla a un uso profano no sórdido, con el consentimiento de quienes legítimamente mantengan derechos sobre ella, y con tal de que por eso no sufra ningún detrimento el bien de las almas» (c. 1222 § 2 CIC). No se trata, por tanto, en este caso de «imposibilidad», sino de la presencia de «otras causas graves» que «aconsejan» que una iglesia no siga destinándose al culto. Compete también al Obispo diocesano verificar la gravedad de tales causas y tomar la decisión –mediante decreto– de reducción

²¹ Cfr. A. LONGHITANO, *Comentario al c. 1212*, en AA.VV., *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, cit., III, 1810.

a uso profano no sórdido, no sin antes verificar que el bien de las almas no sufrirá ningún detrimento, contar con el consentimiento de quienes tengan derechos sobre la iglesia y escuchar el parecer del consejo presbiteral. Por lo que será necesario abrir un procedimiento administrativo en el que puedan intervenir los sujetos interesados y se hagan constar los extremos señalados en el c. 1222 § 2 CIC.

En la práctica canónica es, sin embargo, oportuno distinguir las distintas causas. A propósito, por ejemplo, de la destrucción total o «en gran parte» del edificio o de otro lugar de culto o de la imposibilidad de su uso y de su reparación, es importante distinguir la cuestión ritual y canónica de la pérdida de la dedicación o bendición del lugar de culto, de la cuestión pastoral y económica de la oportunidad y de las posibilidades de «reconstrucción» o «reparación» para que en ese mismo lugar pueda surgir de nuevo un edificio o lugar de culto equivalente al que ha sido destruido o pueda seguir utilizándose el que estaba dañado. En consecuencia será necesario que la intervención de la autoridad eclesiástica no se limite a constatar la situación de destrucción o de daño sino que examine las causas –fortuitas o provocadas, con dolo o culpa– de la destrucción o del daño. Teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada caso, corresponderá a la autoridad eclesiástica, al propietario, a la persona responsable del culto y a la comunidad de fieles afectada, determinar los caminos que se deben seguir. En este contexto, es importante recordar cuanto establece el c. 1284 § 2, 1º CIC, a propósito de los administradores de bienes, los cuales deben: «vigilar para que los bienes encomendados a su cuidado no perezcan en modo alguno ni sufran daño, suscribiendo a tal fin, si fuese necesario, contratos de seguro». Esta es, en efecto, la práctica habitual en Italia, en donde es «obligatorio» suscribir un seguro contra incendios y otras calamidades naturales o provocadas y «aconsejable» una póliza de responsabilidad civil por daños a terceros²². En el caso de la Iglesia en Italia, es importante tener presentes los acuerdos con el Estado sobre la financiación de la recons-

²² Con referencia a este canon, en el vademécum preparado por los ecónomos de las diócesis italianas se recuerda a los párrocos –pero es aplicable a todas las personas responsables de un edificio o lugar de culto– la necesidad de tutelar el patrimonio de la parroquia ante situaciones de riesgo, con la obligación de suscribir un seguro contra incendios y otros eventos, fortuitos o no, que puedan afectar a los edificios y a los bienes en ellos contenidos, así como la conveniencia de suscribir un seguro contra otros infortunios que cubra los eventuales daños a terceros. También se señalan los criterios que deben ser tenidos en cuenta en la estipulación de tales contratos y se recuerda la necesidad de respetar los plazos de denuncia de los siniestros previstos en los contratos de seguros (cfr. *La gestione e l'amministrazione della parrocchia*, cit., 137-146).

trucción o reparación de las iglesias destruidas o dañadas por calamidades naturales²³.

Por lo que se refiere a las «otras graves causas», que según el c. 1222 § 2 CIC, pueden «aconsejar» que una iglesia deje de emplearse para el culto divino, ni la jurisprudencia de la Signatura Apostólica, ni la doctrina han llegado a señalar criterios precisos para su determinación. Como señala Montini, después de haber analizado la jurisprudencia, el juicio sobre la gravedad parece dejado al Obispo diocesano sobre la base de que él, más que ningún otro, está en condiciones de conocer la situación pastoral, patrimonial, económica, etc. En la praxis en Italia, como sucede en otros países europeos, se presenta con frecuencia el caso de una progresiva disminución de la población en el centro histórico de muchas ciudades, en donde existen numerosas iglesias, que resulta excesivamente oneroso –desde el punto de vista pastoral y económico– mantener abiertas al culto. Como señala Montini a propósito de las «situaciones de hecho»²⁴, existen muchos modos, formalmente diferentes a la reducción a uso profano de una iglesia, que comportan sin embargo los mismos efectos: por ejemplo, la decisión de «cerrar» una iglesia²⁵, o de «no autorizar» en ella la celebración del culto, sin que haya una decisión formal –mediante decreto del Obispo diocesano– de reducción a uso profano y sin que hayan podido intervenir los sujetos interesados²⁶. Será, por tanto, necesario examinar las circunstancias concretas de cada caso, para determinar la naturaleza de la

²³ Cfr. *Relazione della Commissione paritetica Italia-Santa Sede istituita per la soluzione di questioni interpretative ed applicative delle norme relative ai beni e agli enti ecclesiastici approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984*, 24 febrero 1997, en AAS 90 (1998) 702-709.

²⁴ Se debe tener en cuenta que la *reductio ad usus profanos* de hecho puede tener su origen no sólo en actos ilegítimos de diverso tipo –por parte del Estado, del propietario o de terceros–, sino también en la falta de medios económicos para mantener abierto el lugar de culto, en el gradual abandono de la práctica religiosa, o en la falta de ministros, etc. (cfr. G.P. MONTINI, *La cessazione degli edifici di culto*, cit., 281-282 y 290-292). Cfr. también F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, en *Ius Ecclesiae* 10 (1998) 111-148.

²⁵ A este propósito se puede citar el *Tassario* de la Archidiócesis de Milán, en el que, a propósito de las prácticas que se refieren a edificios de culto, a continuación de la «dedicación o bendición de iglesias, oratorios, etc.», se contempla la «licencia para el cierre al culto de un edificio sagrado». Para ambas prácticas se establece la tasa de 50 €, a lo que se añade el reembolso de los eventuales gastos sostenidos por el organismo competente.

²⁶ Como ha señalado Daneels, y recuerda Montini, es praxis constante de la Signatura Apostólica considerar la clausura de una iglesia para el culto divino como equivalente a su reducción a uso profano (cfr. F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, cit., 130; G. P. MONTINI, *La cessazione degli edifici di culto*, cit., 291).

situación de hecho, la legitimidad de las actuaciones de la autoridad eclesiástica, y las posibilidades de intervención de los demás sujetos afectados.

5. ACTOS DE LA AUTORIDAD ECLESIASTICA EN EL EJERCICIO DE SUS PODERES Y FUNCIONES SOBRE LOS LUGARES DE CULTO EN LA PRAXIS ITALIANA

Teniendo en cuenta que la *deputatio ad cultum* de un lugar comporta su permanente reserva al ejercicio y al fomento del culto, de la piedad y de la religión, el derecho canónico prohíbe todo uso impropio, es decir todo «lo que no esté en consonancia con la santidad del lugar» (c. 1210 CIC) y establece que en él «la autoridad eclesiástica ejerce libremente sus poderes y funciones» (c. 1213 CIC). La misma normativa canónica establece que el Ordinario –por tanto, sólo él– puede, en casos concretos –esto es, en circunstancias específicas y ocasionales– permitir otros usos, siempre que no sean contrarios a la santidad del lugar (cfr. c. 1210 CIC). Entre tales usos, se suelen considerar, en situaciones de emergencia o de calamidad, la acogida de personas necesitadas, y, en situaciones normales, las actividades culturales de contenido religioso.

En general, corresponde a la autoridad eclesiástica en el ejercicio de sus poderes y funciones sobre los lugares de culto el derecho y el deber de vigilancia sobre su administración y conservación²⁷; lo que comprende, entre otras cosas, fijar los criterios para la organización de conciertos de música sagrada, de exposiciones de arte sagrado o de visitas guiadas en iglesias y lugares sagrados, de acuerdo con las normas canónicas y, en Italia, con las disposiciones de la CEI. Según estas últimas corresponde el Obispo diocesano establecer –si lo considerara oportuno– una regulación diocesana sobre el sonido de las campanas, en el respeto de las legítimas costumbres y del contexto social.

²⁷ Como establece la normativa canónica, «están sujetos a la visita episcopal ordinaria las personas, instituciones católicas, cosas y lugares sagrados que se encuentran dentro del ámbito de la diócesis» (c. 397 § 1 CIC), con algunas limitaciones en lo referente a las iglesias y oratorios de los Institutos de derecho pontificio (cfr. cc. 392 § 2; 615; 628 § 2; 637 y 683 CIC; AS, n. 220). Acerca de la visita pastoral a las parroquias, el Directorio para los Obispos recuerda que «en la visita no se debe omitir el examen de la *administración y conservación* de la parroquia: lugares sagrados y ornamentos litúrgicos, libros parroquiales y otros bienes. Sin embargo, algunos aspectos de este examen pueden ser asignados a los vicarios foráneos o a otros clérigos idóneos, para que sean realizados en los días precedentes o sucesivos a la visita, de manera que el Obispo pueda dedicar el tiempo de la visita sobre todo a los encuentros personales, como corresponde a su oficio de Pastor» (AS, n. 221).

5.1. *Los conciertos en iglesias*

Acerca de la concesión de una iglesia o de otro lugar de culto para conciertos de música, se debe tener presente el documento *Conciertos en las iglesias*, enviado por la Congregación para el Culto Divino a los Presidentes de las Conferencias Episcopales en 1987²⁸, sintetizado en el Directorio para los Obispos de 2004 en los siguientes términos: «En lo que se refiere a los *conciertos*, conviene vigilar para que sólo se ejecute música sagrada –es decir, compuesta como acompañamiento a la liturgia–, o por lo menos de inspiración religiosa cristiana, y que sean programados y ejecutados con la finalidad explícita de promover la piedad y el sentimiento religioso y nunca en detrimento del servicio pastoral primario que debe ofrecer el lugar. En cada caso tales iniciativas sean evaluadas con sabiduría y limitadas a pocos casos» (AS, n. 155).

Conviene, sin embargo, reconocer que la música sagrada es parte integrante del patrimonio de la Iglesia, con un valor que no es meramente cultural sino propiamente religioso. En este sentido, considerando que «no todos los conciertos son ajenos a la actividad de culto, piedad y religión, aunque se desarrollen fuera del contexto litúrgico»²⁹, la CEI ha establecido algunos criterios con el fin de identificar los tipos de ejecución musical que pueden ser organizados sin necesidad de obtener el permiso del Ordinario previsto en el c. 1210 CIC: «La ejecución musical en una iglesia fuera de la liturgia constituye una actividad institucional del ente oficiante sólo cuando concurren conjuntamente las siguientes condiciones: a) organización por parte de un ente eclesiástico; b) ejecución preponderante de música sagrada; c) ingreso libre y gratuito. Si falta una de estas tres condiciones, el concierto constituye una actividad cultural, diversa de la actividad de culto, que requiere, a tenor del c. 1210 CIC, la licencia escrita del Ordinario diocesano para el uso profano de la iglesia *per modum actus* y a la que es aplicable la normativa [civil] sobre los espectáculos» (IMA, n. 130).

Criterios análogos pueden también aplicarse a la realización en otros lugares de culto de otro tipo de actuaciones de contenido religioso –por ejemplo, autos sacramentales u otras representaciones artísticas que sean expresión de

²⁸ CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO, *Conciertos en las iglesias*, 5 noviembre 1987, en *Notitiae* 24 (1988) 25-32. El documento distingue entre música y canto para la liturgia, música de inspiración religiosa y música no religiosa, y ofrece algunas orientaciones para la decisión de la autoridad diocesana.

²⁹ *La gestione e l'amministrazione della parrocchia*, cit., 53, en donde se recuerda al párroco la necesidad de informarse sobre las normas civiles –en particular, sobre los derechos de autor– así como sobre la existencia de una normativa canónica local en la materia.

piedad popular—, de modo que se garantice su dignidad y su valor estético, conforme a las tradiciones y costumbres de cada lugar.

5.2. *Las visitas y las exposiciones en las iglesias*

Considerando que el mejor modo de valorizar la dimensión cultural de las iglesias y demás lugares de culto, y en general de las manifestaciones del arte cristiano al servicio del culto, se realiza en las acciones litúrgicas³⁰, la CEI ha establecido algunos principios sobre las visitas culturales o turísticas a las iglesias, que pueden también aplicarse a otras iniciativas de carácter didáctico, científico o divulgativo como, por ejemplo, las exposiciones: «Sólo en línea de principio es posible distinguir la dimensión cultural de una iglesia de su dimensión religiosa, porque de hecho los dos aspectos son inseparables: en efecto la dedicación al culto constituye la razón de ser del edificio y de las obras de arte que contiene. La visita de una iglesia comporta la comprensión de los valores dedicados al culto de aquel lugar, que son también testimonio de la vida y de la historia de la Iglesia, y exige respeto: las iglesias no son simples bienes de consumo turístico. Acerca de la visita y de la utilización de una iglesia, manténgase firme el principio de que ésta debe ser accesible libre y gratuitamente a todos en el horario establecido por el rector» (IMA, n. 129). Un principio establecido en CIC³¹, que no excluye, sin embargo, de modo absoluto que en algunos casos determinados, con la autorización del Ordinario del lugar, pueda fijarse una cantidad, a modo de oferta o contribución al mantenimiento y a las medidas de seguridad, para la visita de iglesias especialmente

³⁰ Como afirmó el Beato Juan Pablo II: «La nueva evangelización exige un renovado compromiso en el culto litúrgico, que es también una rica fuente de instrucción para el pueblo fiel (cf. *Sacro-sanctum Concilium*, 33). Como es sabido, el culto ha encontrado desde siempre un aliado natural en el arte, de modo que, además de su intrínseco valor estético, los monumentos de arte sacro poseen también el catequístico y cultural. Por eso, es preciso valorarlos teniendo en cuenta su *hábitat* litúrgico, conjugando el respeto a la historia con la atención a las exigencias actuales de la comunidad cristiana, y haciendo que el patrimonio histórico-artístico al servicio de la liturgia no pierda nada de su elocuencia» (*Discurso a la Asamblea Plenaria de la Pontificia Comisión para los Bienes Culturales de la Iglesia*, 31 de marzo de 2000, n. 5, en www.vatican.va).

³¹ En el que se establece expresamente que «la entrada a la iglesia debe ser libre y gratuita durante el tiempo de las celebraciones sagradas» (c. 1221 CIC); y se declara que «los fieles tienen derecho a entrar [en la iglesia] para la celebración, sobre todo pública, del culto divino» (c. 1214 CIC); razón por la que también se establece que «la iglesia en la que está reservada la santísima Eucaristía debe quedar abierta a los fieles, por lo menos algunas horas al día, a no ser que obste una razón grave, para que puedan hacer oración ante el santísimo Sacramento».

ricas en obras de arte, en los horarios en que no se desarrollan actos de culto y siempre que se respeten los derechos de los fieles³².

En la praxis seguida hasta ahora en Italia, solamente en alrededor de 60 iglesias –concentradas en su mayor parte en Florencia, Venecia y Verona, en donde la afluencia de turistas es particularmente numerosa– se ha adoptado un sistema de billetes o *tickets*³³. Una praxis destinada, sin embargo, a cambiar en el futuro, conforme a las indicaciones contenidas en un reciente documento de la CEI de enero de 2012 [posterior, por tanto, al Simposio de Pamplona de noviembre de 2011], en el que, apelándose a la tradición italiana, se opta por favorecer del modo más amplio posible el acceso libre y gratuito a todas las iglesias abiertas al culto, salvo en casos excepcionales a juicio del Ordinario del lugar, y se limita la admisibilidad de un *ticket* «solamente para la visita turística de partes del complejo (cripta, tesoro, baptisterio autónomo, torre, claustro, capilla singular, etc.), claramente distintas del edificio principal de la iglesia, que debe permanecer disponible para la oración»³⁴.

En la práctica de la Iglesia en Italia también se recomienda a las parroquias que promuevan o acojan con favor iniciativas «dirigidas al más amplio conocimiento del patrimonio cultural, también a través de visitas guiadas y exposiciones»³⁵, con la condición de que «la destinación al culto de los lugares sagrados

³² Tratándose de una materia particularmente delicada, en la que debe evitarse «hasta la más pequeña apariencia de negociación o comercio» –como establece el c. 848 CIC en materia de ofrendas de Misas, pero aplicable, en mi opinión, a todo lo que se refiere al culto–, resulta oportuno que el Ordinario del lugar, antes de aprobar este tipo de medidas, verifique que no son practicables otras soluciones (como las ofrendas voluntarias, o la destinación de fondos públicos –teniendo en cuenta que tales visitas favorecen el interés general– o privados) y vigile que la cantidad solicitada sea moderada, que lo recaudado se destine exclusivamente al mantenimiento y seguridad de la iglesia de que se trate, y se garantice la entrada libre y gratuita a los fieles que desean entrar para fines de culto. Cfr. G. FELICIANI, *La questione dei ticket d'accesso alle chiese*, en AA.VV., *Studi in onore di Mario Romano*, IV, Napoli 2011, 2809-2816; en donde se señalan las incongruencias de la praxis seguida en algunas iglesias italianas.

³³ Se trata de un numero ciertamente reducido si se tiene en cuenta que en Italia existen alrededor de 95.000 iglesias, de las cuales alrededor de 85.000 están sujetas a la tutela prevista en la legislación estatal sobre bienes culturales; cfr. G. FELICIANI, *Le chiese nel quadro della tutela del patrimonio culturale*, en AA.VV., *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, a cargo de D. Persano, Milano 2008, 255-269.

³⁴ CEI-CONSIGLIO PERMANENTE, Nota *L'accesso nelle chiese*, 31 enero 2012 (en www.chiesacattolica.it [página web de la CEI]). Vid Anexo 1. *El acceso a las iglesias*.

³⁵ *La gestione e l'amministrazione della parrocchia*, cit., 105. Interesante a este respecto la iniciativa de la Pontificia Universidad Lateranense de ofrecer un programa de formación para «guías turísticas pastorales», con el fin de que desarrollen una función, no sólo cultural, sino también de formación y evangelización.

no reciba ningún perjuicio y se garanticen las condiciones de seguridad del patrimonio»³⁶. En este sentido se establece que la creación de un museo parroquial o interparroquial debe ser estudiada por los organismos competentes de la curia diocesana y obtener la debida autorización por parte del Ordinario. Asimismo se aconseja a las parroquias que, para la organización de exposiciones, acudan a la curia diocesana para obtener el oportuno asesoramiento³⁷.

5.3. *El sonido de las campanas*

Acerca del uso de las campanas, que en los últimos tiempos ha suscitado algunos problemas por razones de diverso género (acciones judiciales para obtener el «silenciamiento» de las campanas; ordenanzas municipales sobre la denominada «contaminación acústica»; el pretendido «respeto» de las minorías religiosas; etc.), es útil señalar un documento de la CEI de mayo de 2002³⁸, en el que se afronta la cuestión, tanto desde el punto de vista de los principios como de las normas canónicas y litúrgicas³⁹, y se ofrecen indicaciones y sugerencias para que esta práctica tradicional sea tutelada del modo más correcto y eficaz. Aparte de recordar que el sonido de las campanas es un elemento de la tradición de la Iglesia, que tiene un fundamento consuetudinario que se remonta a los siglos V-VI, la CEI señala su carácter primariamente religioso y cultural, como expresión de la vida de la comunidad cristiana, que impide que puedan equipararse a la simple emisión de sonidos.

A los Obispos diocesanos se sugiere que establezcan un reglamento específico sobre el uso de las campanas y se ofrecen indicaciones precisas sobre

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ *Ibidem*, 106.

³⁸ CEI-COMITATO PER GLI ENTI E I BENI ECCLESIASTICI, *Circolare 33. La regolamentazione del suono delle campane*, 10 mayo 2002, en www.chiesacattolica.it.

³⁹ Es útil señalar a este respecto el examen que se hace en el documento de la CEI de la evolución normativa en esta materia y de la laguna legal provocada por la no inclusión en el CIC 83 de las disposiciones contenidas en el c. 1169 §§ 1-4 CIC 17: «§ 1. *Cuilibet ecclesiae campanas esse convenit, quibus fideles ad divina officia aliosque religionis actus invitentur.* § 2. *Etiam ecclesiarum campanae debent consecrari vel benedici secundum ritus in probatis liturgicis libris traditos.* § 3. *Earum usus unice subest ecclesiasticae auctoritati.* § 4. *Salvis conditionibus, probante Ordinario, apposis ab illis qui campanam ecclesiae forte dederint, campana benedicta ad usus mere profanos adhiberi nequit, nisi ex causa necessitatis aut ex licentia Ordinarii aut denique ex legitima consuetudine*». En la fase de elaboración del CIC 83 se consideraron suficientes las normas contenidas en los libros litúrgicos (cfr. *Communicationes* 12 [1980] 336), que, sin embargo, sólo tratan de las campanas a propósito de su bendición (cfr. *RITUALE ROMANUM, De Benedictionibus*, editio typica, In Civitate Vaticana 1994, *Praenotanda*, nn. 1455-1460).

sus posibles contenidos. También se ofrece un formulario que puede servir de modelo para la elaboración de un reglamento diocesano⁴⁰. Concretamente se señala la conveniencia de reflejar en la premisa los siguientes puntos: el carácter tradicional del sonido de las campanas; su prioritario, pero no exclusivo, significado litúrgico y de servicio para la comunidad cristiana; su pertenencia a la esfera de la libertad religiosa; la competencia exclusiva en la materia de la autoridad eclesiástica; y la conveniencia de respetar en lo posible las legítimas exigencias y sensibilidades. En la parte dispositiva se sugiere: establecer los horarios que deben respetarse; las modalidades del sonido; su duración; y el respeto de las legítimas costumbres y del contexto social⁴¹.

6. ACTOS RELATIVOS A IGLESIAS, ORATORIOS, CAPILLAS PRIVADAS Y SANTUARIOS

Como se ha dicho anteriormente, la normativa canónica universal considera algunos actos administrativos –licencias, autorizaciones, dispensas, etc.– en relación, unas veces, con las iglesias, otras veces, con los oratorios, las capillas privadas o los santuarios. Examinaremos a continuación los más frecuentes teniendo en cuenta las indicaciones particulares de la CEI. Dejamos para el apartado posterior la «calificación jurídico-pastoral» de una iglesia, acto del Obispo diocesano previsto por las disposiciones de la CEI (vid. *infra* 7.1).

6.1. *La licencia para la construcción de una iglesia*

Entre los actos administrativos que se refieren a las iglesias ocupa el primer lugar el consentimiento escrito del Obispo diocesano para su construcción, previsto en la normativa canónica universal (cfr. c. 1215 CIC)⁴². En la práctica italiana se realiza mediante un acto escrito en que se hace constar: el sujeto que presenta la petición, indicando si se trata de un sacerdote o del su-

⁴⁰ Vid. Anexo 2. *Reglamento diocesano sobre el sonido de las campanas*.

⁴¹ En el caso de que se presenten acciones judiciales o se emanen ordenanzas administrativas tendentes a silenciar la campanas o a regular los horarios en que pueden usarse, el vademécum citado recuerda al párroco que, antes de tomar cualquier decisión, “debe” informar oportunamente a la curia diocesana, «con el fin de evitar que la inercia o la supina obediencia a los lamentos de algunos constituyan un precedente después difícil de superar» (*La gestione e l'amministrazione della parrocchia*, cit., 53-54).

⁴² Para un análisis de la normativa canónica sobre la construcción de una nueva iglesia, cfr. M. MOSCONI, *Chiesa e chiese: le norme canoniche relative alla costruzione di una nuova chiesa*, en *Quaderni di diritto ecclesiale* 13 (2000) 248-267.

perior o superiora; que han sido oídos el consejo presbiteral y los rectores de las iglesias vecinas; que la nueva iglesia podrá servir al bien de las almas; que se ha verificado que no faltarán los medios necesarios para edificarla y para sostener en ella el culto divino; que se ha tenido en cuenta el parecer del organismo diocesano competente en la materia; que en la construcción de la iglesia se observarán las indicaciones de éste; y que, terminada la construcción, la iglesia será dedicada o bendecida cuanto antes, conforme a las leyes litúrgicas (cfr. c. 1516 CIC)⁴³.

6.2. *La licencia para la constitución de un oratorio o de una capilla privada*

Características similares a la licencia para la construcción de una iglesia, presenta el acto –en la práctica italiana realizado también por escrito– por el que se concede la licencia para la constitución de un oratorio por parte del Ordinario (cfr. cc. 1223-1225 CIC). En este documento se hace constar: el sujeto solicitante, especificando si se trata del capellán o del superior o superiora; la indicación del lugar –mediante documentación planimétrica y fotográfica– en donde será constituido el oratorio; que se ha oído el parecer del párroco y del arcipreste competentes por territorio; que se ha tenido en cuenta el parecer del organismo competente en materia de liturgia, sobre la base de la visita realizada en tal fecha; que se da, contemporáneamente, mandato al Vicario general o episcopal de proveer a la bendición del lugar (cfr. c. 1229 CIC) y de levantar la correspondiente acta en doble copia; que, una vez bendecido, el oratorio quedará reservado únicamente al culto divino y no podrá ser destinado a usos profanos sin autorización del mismo Ordinario (cfr. c. 1224 § 2 CIC); y la indicación expresa de que la celebración de la Santa Misa y de los otros actos de culto en el oratorio deberán tener lugar con el debido respeto de los derechos de la parroquia en donde se encuentra y de la normativa universal y diocesana ⁴⁴. Acerca de los oratorios interesa también señalar cuanto afirma la instrucción administrativa de la CEI: «El oratorio no tiene jamás personalidad jurídica sino que está anejo a otra persona jurídica, que puede también ser un ente no eclesiástico. La responsabilidad pastoral del oratorio compete al sacerdote encargado, mientras que la responsabilidad económica compete al administrador de la persona jurídica a la que el oratorio está anejo» (IMA, n. 141).

⁴³ Vid. Anexo 3. *Licencia para la construcción de una iglesia*.

⁴⁴ Vid. Anexo 4. *Licencia para la constitución de un oratorio*.

Similar al anterior es el acto –realizado igualmente por escrito en la praxis italiana– por el que el Ordinario del lugar concede la licencia para la constitución de una capilla privada y, eventualmente, para que en ésta puedan celebrarse la Santa Misa u otras funciones sagradas (cfr. cc. 1226 y 1228 CIC). En él se debe hacer constar: el sujeto solicitante, habitualmente un fiel laico, hombre o mujer, propietario del lugar; la indicación precisa –mediante documentación planimétrica y fotográfica– del lugar en donde se constituirá la capilla; que se ha oído el parecer del párroco y del arcipreste competentes por territorio; que el edificio o el ambiente indicado quedará reservado únicamente al culto con exclusión de cualquier uso doméstico (cfr. cc. 1226 y 1229 CIC); eventualmente, que se pueden celebrar la Santa Misa y otros actos de culto, dejando a salvo los derechos de la parroquia y en el respeto de la normativa universal y diocesana; eventualmente, que se puede custodiar el Santísimo Sacramento; y que se da, contemporáneamente, mandato al Vicario general o episcopal de proveer a la bendición del lugar (cfr. c. 1229 CIC) y de levantar la correspondiente acta en doble copia⁴⁵. La instrucción de la CEI señala además que «la responsabilidad administrativa y económica de la capilla [privada] corresponde al propietario, sin perjuicio del derecho del Ordinario diocesano de ejercitar su propio poder de vigilancia (cfr. c. 1213 CIC)» (IMA, n. 142).

6.3. *La autorización para la reserva de la Santísima Eucaristía*

En el caso de las iglesias –diversas a la iglesia catedral o equiparada, a la iglesia parroquial y a la iglesia aneja a la casa de un instituto religioso o sociedad de vida apostólica–, de los oratorios –diversos al oratorio anejo a la casa de un instituto religioso o sociedad de vida apostólica– y de las capillas privadas ya constituidas, que no hubieran recibido la autorización para reservar la Santísima Eucaristía, ésta puede ser concedida mediante un acto del Ordinario del lugar (cfr. c. 934 CIC), que en la práctica italiana se concede también por escrito. En este documento se hace constar: el sujeto solicitante, indicando si se trata del capellán o del superior o superiora; el lugar en que se reservará el Santísimo Sacramento; que ha sido oído el párroco competente por territorio; que se ha tenido en cuenta el parecer del organismo competente en materia de liturgia, sobre la base de la visita realizada en tal fecha; y se precisa además: que, en la medida de lo posible, celebrará allí la Santa Misa un sacerdote al menos dos veces al mes (cfr. c. 934 § 2 CIC); que ante el sagrario en el que está reservada la santísima Eucaristía ha de lucir constantemente una lámpara

⁴⁵ Vid. Anexo 5. *Licencia para la constitución de una capilla privada*.

especial (cfr. c. 940 CIC); que se guarde con la mayor diligencia la llave del sagrario (cfr. c. 938 § 5 CIC); que las Hostias consagradas deben renovarse con frecuencia (cfr. c. 939 CIC); y que se deben observar las demás normas canónicas y litúrgicas sobre la reserva y el culto de la Eucaristía. También se hace constar habitualmente la duración de la autorización, y la necesidad de renovar la petición al cumplirse el término establecido⁴⁶.

6.4. *La dispensa para la sepultura en una iglesia*

Aunque la normativa canónica establece la prohibición general de enterrar en iglesias, con excepción del Romano Pontífice, de los Cardenales y de los Obispos diocesanos (cfr. c. 1242 CIC), en la práctica italiana es posible obtener la dispensa y la correspondiente autorización del Obispo diocesano, a petición del rector de la iglesia, mediante un acto escrito en el que se hace constar: el sacerdote solicitante, los datos del difunto, los motivos de la petición, la explícita dispensa del c. 1242 CIC, y los datos relativos a la colocación del sepulcro⁴⁷. Como es obvio, antes de conceder la autorización el Obispo debe verificar la oportunidad de la petición teniendo en cuenta las circunstancias del caso .

6.5. *La aprobación de un santuario y de sus estatutos*

Como establece la normativa canónica, corresponde al Ordinario del lugar la aprobación de un santuario diocesano y de sus estatutos, a la Conferencia Episcopal si se trata de un santuario nacional y a la Santa Sede si se trata de un santuario internacional (cfr. cc. 1230-1232 CIC). En la praxis de la Iglesia en Italia el Ordinario del lugar ejercita esta competencia mediante un acto administrativo en forma de decreto, por el que erige una determinada iglesia –u otro lugar sagrado– en «santuario diocesano». En tal decreto se hace constar: la iglesia que se erige en santuario, con la indicación de la parroquia en que está situada; una crónica histórica de los eventos que han contribuido a convertir ese lugar en meta de peregrinaciones y centro de piedad y de vida espiritual; que ha sido oído el arcipreste y que se aprueban los estatutos, en el texto anexo al decreto⁴⁸.

⁴⁶ Vid. Anexo 6. *Autorización para reservar la Santísima Eucaristía*. En la Archidiócesis de Milán, por ejemplo, para la tramitación de esta autorización se establece la tasa de 10 €, a lo que se añade el reembolso de los eventuales gastos sostenidos por el organismo competente.

⁴⁷ Vid. Anexo 7. *La dispensa para la sepultura en una iglesia*.

⁴⁸ Vid. Anexo 8. *Decreto de erección de un santuario diocesano*.

Por lo que se refiere de modo específico a la iglesia y locales anejos es oportuno que en los estatutos se haga constar: que al rector del santuario corresponde la cura litúrgica, pastoral y administrativa del santuario; que en el santuario se desarrollan todas las celebraciones litúrgicas y de piedad popular, excepto las que son propiamente parroquiales; que, como norma, no se celebran matrimonios; que los horarios de las funciones litúrgicas dominicales se concordarán con los párrocos de las parroquias vecinas; a quién corresponde la propiedad de los inmuebles y, eventualmente, que su uso estará regulado mediante acuerdo del Ordinario del lugar con el ente propietario; y que el rector, en su calidad de representante legal del santuario, puede realizar todos los actos de ordinaria y extraordinaria administración en el respeto de las autorizaciones canónicas establecidas⁴⁹.

Por lo que se refiere a los santuarios nacionales en Italia, la CEI ha establecido que «el órgano competente para declarar nacional un santuario y para aprobar los correspondientes estatutos, a tenor de los cc. 1231-1232 CIC, es el Consejo Episcopal Permanente, previa instrucción a cargo de la Presidencia de la CEI»⁵⁰.

7. ACTOS E INDICACIONES ESPECÍFICAS ESTABLECIDAS EN LAS DISPOSICIONES DE LA CEI

7.1. *La «calificación jurídico-pastoral» de una iglesia*

Teniendo en cuenta las diversas funciones litúrgicas y pastorales que puede tener una iglesia, en atención a la comunidad de fieles que la usa y en ella celebra la liturgia con el consentimiento del Obispo diocesano, la CEI ha establecido en su instrucción administrativa un sistema para que quede perfectamente definida la condición jurídica de cada iglesia existente en Italia y la persona jurídica responsable del culto y de la pastoral que en ella se desarrollan (cfr. IMA, nn. 120-121)⁵¹. Tal sistema se basa, por una parte, en la «calificación jurídico-pastoral» de las iglesias, que compete realizar al Obispo diocesano, mediante decreto, en relación con todos los edificios de culto exis-

⁴⁹ Vid. Anexo 9. *Estatutos de un santuario diocesano*, arts. 3-6.

⁵⁰ CEI, *Delibera n. 34*, 18 abril 1985, en Notiziario CEI 3 (1985) 47.

⁵¹ En este sentido la misma instrucción afirma que «a los fines de la calificación jurídica de la iglesia, no es relevante el sujeto propietario del edificio, sino solamente la persona jurídica responsable del culto» (IMA, n. 120).

tentes en el territorio de su diócesis; y, por otra, en una clasificación de la iglesias, establecida por las mismas disposiciones de la CEI «en relación con la función cultural y pastoral y a la comunidad de fieles que en ella celebra la liturgia» (IMA, n. 121). Conforme a esta clasificación se pueden distinguir y calificar las iglesias según las siguientes categorías:

- a) iglesia catedral;
- b) iglesia parroquial;
- c) iglesia rectoral [en italiano: *chiesa rettoria*];
- d) iglesia santuario;
- e) iglesia aneja a una persona jurídica:
 - a un capítulo;
 - a una casa de un instituto religioso clerical o de una sociedad clerical de vida apostólica, de un instituto religioso laical o femenino o de una sociedad laical o femenina de vida apostólica o de un instituto secular;
 - a una asociación o a una cofradía [en italiano: *confraternita*];
 - a un seminario o a otro ente eclesiástico;
 - a una parroquia.

Según la misma instrucción de la CEI, en donde todavía no se haya hecho «el Obispo diocesano proceda a examinar las iglesias existentes en el territorio de la diócesis, de modo que se pueda certificar la propiedad y la calificación jurídica de cada lugar de culto. Donde la calificación no resulte de los actos de la curia, proceda mediante decreto a la determinación» (IMA, n. 122). También se aconseja, en caso de duda sobre la calificación que se debe dar a una iglesia, «elegir la calificación de iglesia aneja a la parroquia en cuyo territorio se encuentra el edificio de culto, de modo que la responsabilidad de la iglesia corresponda al párroco» (*ibidem*). En el caso de una iglesia con dos o más funciones pastorales, se establece que «compete al Obispo diocesano, oídas las partes interesadas, determinar cuál función pastoral sea la preponderante, es decir dar la calificación jurídica de modo que quede individuada, también a los efectos civiles, la persona jurídica responsable del ejercicio del culto» (*ibidem*).

7.2. Los «acuerdos» sobre el uso de una iglesia

Además del caso, recién mencionado, de una iglesia con dos o más funciones pastorales, en que las indicaciones de la CEI consideran necesario un «acuerdo» entre las partes, en el que se precisen las modalidades de colaboración en el ejercicio del culto (cfr. IMA, n. 122), y del caso, al que nos hemos

referido anteriormente (vid. *supra* 2.3), de que el propietario del edificio de culto sea una persona física o un ente civil, en el que se prevé, eventualmente, un «acuerdo» en el que se determinen las condiciones de la concesión del uso del edificio a la persona jurídica responsable del ejercicio del culto (cfr. IMA, n. 125), las normas administrativas de la CEI prevén expresamente –en conformidad con la normativa canónica (cfr. c. 681 § 2 CIC)– la necesidad de un «acuerdo» escrito en el caso de que una iglesia rectoral sea encomendada a un instituto religioso clerical o a una sociedad clerical de vida apostólica (cfr. IMA, n. 135).

7.2.1. *El acuerdo para encomendar una iglesia a un instituto*

En este último caso, en la práctica italiana el «acuerdo» es firmado normalmente por el Obispo diocesano y el Superior Provincial del instituto, y en él se hace constar a propósito del edificio de culto: que al rector corresponde la responsabilidad de edificio sagrado y de los locales anejos, del culto y de la pastoral; que el culto y la acción pastoral deben ser congruentes con la finalidad específica a la que la iglesia está destinada, en el respeto del programa pastoral diocesano y según las indicaciones del Ordinario diocesano, al que el rector responderá personalmente, sin perjuicio de lo dispuesto en el c. 678 CIC; y que cualquier uso eventual de la iglesia y de los locales anejos para actividades no inmediatamente de religión o de culto –pero en todo caso en consonancia con la función y la dignidad de lugar– debe realizarse en el respeto del derecho particular de la diócesis y –según los casos– ser específicamente autorizado por el Ordinario diocesano⁵².

7.2.2. *El acuerdo para conceder una iglesia a una comunidad oriental no católica*

Otro caso particular de «acuerdo», no previsto en las normas administrativas contenidas en la IMA de 2005, pero posteriormente objeto de indicaciones específicas por parte de la CEI –en un vademécum publicado *ad*

⁵² Vid. Anexo 10. *Acuerdo entre una diócesis y un instituto religioso para encomendar una iglesia rectoral*, art. 5.

⁵³ CEI-UFFICIO NAZIONALE PER L'ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO-UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI GIURIDICI, *Vademecum per la pastorale delle parrocchie cattoliche verso gli orientali non cattolici*, 23 febrero 2010, en www.chiesacattolica.it. El vademécum –con palabras de don Gino Battaglia y de Mons. Adolfo Zambon, Directores de los respectivos Uffici– «se propone una finalidad práctica de índole pastoral, como ayuda para las Iglesias

experimentum en 2010⁵³—, se refiere a la posibilidad de concesión de iglesias católicas a comunidades orientales no católicas que lo soliciten. Entre otras cosas se señalan a los Obispos diocesanos algunos criterios de conducta sobre el tratamiento de tales solicitudes⁵⁴, y sobre los modos que conviene adoptar —si así lo considera oportuno el Obispo diocesano— para la concesión de una iglesia: formalizada habitualmente mediante un contrato de comodato por un tiempo no superior a 19 años⁵⁵.

7.3. *Las indicaciones de la CEI sobre las diversas categorías de iglesias*

Las disposiciones de la CEI en materia administrativa no solo establecen las diversas categorías en que pueden ser calificadas las iglesias (vid. *supra* 7.1), sino también ofrecen indicaciones particulares para cada una de ellas, de las que a continuación se mencionan las más significativas, para evitar —en la medida de lo posible— repeticiones de lo dicho anteriormente.

particulares. (...) Ajeno a cualquier intento de proselitismo, quiere ofrecer algunas indicaciones útiles para las relaciones con la jerarquía oriental no católica, en el caso de que ésta pida la colaboración de las diócesis italianas. Se publica en vía experimental bajo la responsabilidad conjunta de los dos *Uffici*, competentes por razón de la materia, de la Secretaría General de la CEI, con la autorización del Consejo Permanente de la CEI» (*Introduzione*, en *ibidem*, 1). Cfr. P. GEFAELL, *L'attenzione agli orientali cattolici nei documenti delle Conferenze episcopali*, en *Ius Ecclesiae* 22 (2010) 367-382.

⁵⁴ Acerca del tratamiento que se debe dar a estas solicitudes, se señala: «Cuando una Iglesia oriental no católica no tenga un edificio sagrado o un cementerio y pida ayuda a un Obispo católico (cfr. c. 670 § 2 CCEO), éste, antes de valorar la petición, verificará la canonicidad de tal Iglesia, con la indicación de la eparquía y del Obispo del que depende, así como la identidad del sacerdote, el número de fieles orientales no católicos que deberían valerse de la iglesia y la periodicidad de las celebraciones. Además se tendrá en cuenta la situación del diálogo ecuménico con la Iglesia en cuestión y de la devolución de los edificios de culto a las comunidades orientales católicas en el país de origen según el criterio ecuménico de la reciprocidad (cfr. PONTIFICIO CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN DE LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS, *Directorio ecuménico*, nn. 105-106)» (*ibidem*, n. 67).

⁵⁵ A propósito de la concesión se sugiere en concreto: «Si el Obispo diocesano considera oportuno conceder iglesias católicas a una comunidad oriental no católica (cfr. *Directorio ecuménico*, n. 137; PONTIFICIO CONSEJO PARA LA PASTORAL DE LOS EMIGRANTES E ITINERANTES, Instr. *Erga migrantes caritas Christi*, 3 mayo 2004, n. 56), elija preferiblemente edificios sagrados que no estén en uso. La concesión, como norma, sea formalizada mediante un contrato de comodato por un tiempo no superior a diecinueve años. Exíjase que el edificio sagrado o el local sean mantenidos de modo idóneo y decoroso, según las propias normas litúrgicas. No se admita absolutamente que sean nombrados párrocos, o en cualquier caso encargados de la pastoral en estos lugares, sacerdotes que pertenecieron a la Iglesia católica» (*ibidem*, n. 68).

7.3.1. *La iglesia catedral*

Acerca de la iglesia catedral, en atención al hecho de que la condición jurídica de las iglesias catedrales en Italia es diversa en cada diócesis, según los precedentes históricos y los estatutos particulares de cada catedral, y de que normalmente diversas personas jurídicas están interesadas en ellas, la CEI considera necesario que el Obispo diocesano determine con claridad su condición jurídica, con el fin de plantear correctamente las relaciones entre las diversas personas jurídicas interesadas (cfr. IMA, n. 132).

También se señala en las disposiciones de la CEI que, si la iglesia catedral goza de personalidad jurídica, se debe considerar como un ente separado con administración propia, distinta de la administración de las otras personas jurídicas. En este caso, la cura pastoral y la responsabilidad administrativa, con la excepción de las eventuales competencias de otros entes⁵⁶, pueden ser ejercitadas: a) por el capítulo catedral⁵⁷; b) por un rector (en el caso de que en la catedral tenga su sede una parroquia, se recomienda que el párroco sea nombrado rector); c) por el Obispo diocesano. Si la iglesia catedral no tiene personalidad jurídica se considera aneja al ente diócesis y, por tanto, está regida y administrada personalmente por el Obispo diocesano: es decir la administración de la catedral queda absorbida por la administración de la diócesis (cfr. IMA, 132).

7.3.2. *La iglesia rectoral*

La CEI define la iglesia rectoral [en italiano: *chiesa rettoria*] como «una iglesia destinada al culto público para los fieles de la diócesis, según una fi-

⁵⁶ En particular las denominadas *fabbricerie*, entes civiles regulados por normas estatales, que así las definen: «Bajo el nombre de *fabbricerie* se comprenden todas las administraciones, que, con varias denominaciones, *fabbriche*, *opere*, *maramme*, *cappelle*, etc., proveen, según las disposiciones vigentes, a la administración de los bienes de las iglesias y a la manutención de los respectivos edificios» (art. 15, *comma secondo*, de la ley n. 848/1929). Si bien no se trata de entes eclesiásticos directamente sujetos a la autoridad eclesiástica, la CEI reconoce su gran relevancia por la importancia de los lugares de culto a los que se refieren (cfr. IMA, n. 131).

⁵⁷ A este propósito la CEI sugiere al Obispo diocesano que «contextualmente a la determinación de la condición jurídica de la iglesia catedral, provea también a definir las funciones del capítulo catedral, a tenor del c. 503 CIC, y a disponer la separación del capítulo de la parroquia, a tenor del c. 510 § 1 CIC, en el caso de que el capítulo fuera todavía titular de la cura de almas. A petición de la autoridad eclesiástica competente, puede ser revocado el reconocimiento civil de los capítulos, en el caso de que éstos ya no respondan a particulares exigencias o tradiciones religiosas o culturales de la población (cfr. art. 14 de la ley n. 222/1985). Es útil recordar que la erección, la modificación o la supresión del capítulo catedral están reservadas a la Sede Apostólica (cfr. c. 504 CIC)» (IMA n. 133).

nalidad específica determinada por el Obispo diocesano» que «está regulada por los cc. 556-563 CIC y por el eventual estatuto» (IMA, n. 134). Asimismo establece que «el rector es el único administrador y el representante legal del ente iglesia» (*ibidem*). Y que «la iglesia rectoral puede ser confiada a un instituto religioso clerical o a una sociedad clerical de vida apostólica mediante una convención entre la diócesis y el instituto (vid. *supra* 7.2). También en este caso la iglesia permanece bajo la jurisdicción del Obispo diocesano» (IMA, n. 135).

7.3.3. *La iglesia santuario*

A propósito de la iglesia que ha sido erigida en santuario la CEI recuerda que su función pastoral «es el ejercicio del culto por parte de los fieles de una diócesis o de una o más naciones». Por este motivo, «la iglesia-santuario no puede considerarse iglesia aneja a un instituto religioso o a una determinada comunidad de fieles, aunque este ente sea el propietario del inmueble» (IMA, n. 136). En consecuencia se establece que «la condición jurídica de una iglesia calificada como santuario es equivalente a la de las rectorías con personalidad jurídica canónica (cfr. IMA, nn. 134-135), salvo cuanto está previsto por los cc. 1230-1234 CIC y por los estatutos propios» (IMA, n. 136). Teniendo en cuenta que «el ejercicio del culto en tal lugar se refiere a fieles de toda la diócesis (o nación o varias naciones)», «el santuario está bajo la especial vigilancia de la autoridad eclesiástica que ha aprobado el estatuto», y «compete a la misma autoridad también la tutela sobre la administración de bienes del santuario» (*ibidem*). También se sugiere: «en el caso en que un santuario se encuentre en una situación de hecho diversa a la prevista por la normativa vigente, el Obispo diocesano considere si conviene aprobar, a tenor del c. 1232 § 1 CIC, unos estatutos redactados según los principios antes indicados, y pedir el reconocimiento a los efectos civiles de la personalidad jurídica» (*ibidem*).

Por lo que se refiere a los efectos de la calificación como «santuario» de una iglesia sede de una parroquia se señala que esto «significa el reconocimiento por parte del Obispo diocesano que la iglesia tiene como función pastoral preponderante la celebración del culto por parte de los fieles que acuden en peregrinación respecto a la celebración de la comunidad parroquial. En caso contrario la iglesia debería calificarse como iglesia parroquial y podría ser denominada «santuario» en sentido lato, no jurídico» (IMA, n. 137). En el primer caso «corresponde al santuario proveer a la custodia y manutención del edificio de culto, al ejercicio del culto (con excepción de las celebraciones

parroquiales) y a la pastoral de acogida de los peregrinos. Compete, por el contrario a la parroquia proveer a la custodia y manutención de los locales parroquiales, a las celebraciones parroquiales y a la actividad pastoral de la comunidad parroquial» (*ibidem*).

En el caso en que el Obispo diocesano encomiende «la rectoría de un santuario, mediante estatuto o mediante convención, a un instituto religioso clerical o a una sociedad clerical de vida apostólica», puede «disponer la asignación al mismo instituto de una parte de las ofertas recibidas de los peregrinos» (IMA, n. 138).

7.3.4. *La iglesia parroquial*

Conforme a las normas canónicas y estatales la CEI define como “iglesia parroquial” «en sentido propio, la iglesia que es sede de una parroquia y está aneja jurídicamente a la misma. A tenor de los arts. 30 y 11 de la ley n. 222/1985, ésta [la iglesia parroquial] no puede tener personalidad jurídica civil autónoma [de la parroquia]» (IMA, n. 139). También se precisa que no toda iglesia sede de una parroquia debe necesariamente ser calificada como «parroquial». En efecto, puede darse el caso de que una parroquia tenga su sede definitiva en una iglesia catedral o en un santuario, o una sede provisional en una iglesia aneja a otra comunidad de fieles (cfr. *ibidem*). Por este motivo, la CEI no da indicaciones específicas para la iglesia parroquial, pues se le aplican las indicaciones correspondientes a la categoría de que se trate.

7.3.5. *La iglesia aneja a una persona jurídica*

Acerca de las iglesias anejas a una persona jurídica, la instrucción de la CEI señala que «tienen como función pastoral preponderante la celebración de la liturgia por parte de la comunidad de fieles a la que están anejas». Según la ley italiana (cfr. art. 11 ley n. 222/1985), tales iglesias «no pueden obtener la personalidad jurídica en el ordenamiento civil: su administración está absorbida en la administración de la persona jurídica de la que dependen y a la que compete la responsabilidad económica» (IMA, n. 140).

También se establece a quién compete la responsabilidad pastoral en los diferentes casos. En concreto:

- si es una iglesia aneja a un capítulo, al canónigo que tiene la responsabilidad de culto según los estatutos capitulares;
- si es una iglesia aneja a una casa de un instituto religioso clerical o de una sociedad clerical de vida apostólica, al superior de la casa (éste, aunque sea

- denominado comúnmente «rector», no lo es en el sentido propio del c. 556 CIC y por tanto no es nombrado por el Obispo);
- si es una iglesia aneja a una casa de un instituto religioso laical o femenino o de una sociedad laical o femenina de vida apostólica o de un instituto secular, al rector nombrado por el Ordinario diocesano⁵⁸;
 - si es una iglesia aneja a una cofradía [en italiano: *confraternita*], al rector nombrado por el Ordinario diocesano, que debería ser el capellán de la cofradía, a menos que la cura de la comunidad o de la iglesia no exijan otra cosa;
 - si es una iglesia aneja a un seminario o a otro ente eclesiástico, al rector nombrado por el Obispo diocesano, que debería ser el rector del seminario o del colegio al que la iglesia está aneja, a menos que el Obispo diocesano haya establecido otra cosa;
 - si es una iglesia aneja a una parroquia, al párroco (cfr. IMA, 140).

8. LA PRAXIS DE LA DIÓCESIS DE ROMA EN LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS IGLESIAS: *L'OPERA ROMANA PER LA PRESERVAZIONE DELLA FEDE E LA PROVVISITA DI NUOVE CHIESE IN ROMA*

Por lo que respecta a la praxis de la Diócesis de Roma en materia de iglesias y lugares de culto, centraremos nuestra atención únicamente en la construcción de nuevas iglesias y en la *Opera Romana per la Preservazione della Fede e la Provvisita di nuove Chiese in Roma* [= ORPF], un peculiar organismo del Vicariato de Roma especialmente dedicado, con competencia exclusiva, a todo lo que se refiere a la construcción de nuevas iglesias en Roma⁵⁹.

⁵⁸ En este caso se precisa: «El Código prevé que el capellán de la casa religiosa haga también de rector, a menos que la cura de la comunidad o de la iglesia no exija otra cosa (cfr. c. 570 CIC), y que el Ordinario del lugar no proceda al nombramiento del capellán sin haber consultado al Superior, el cual tiene derecho, oída la comunidad, de proponer un sacerdote (cfr. c. 567 § 1 CIC)» (IMA, n. 140).

⁵⁹ Si bien en el Vicariato de Roma también existe un *Ufficio per l'Edilizia di Culto*, la competencia sobre las nuevas iglesias es de la ORPF, que se sirve de la colaboración de tal *Ufficio*. Por otra parte, el encargo de Director del *Ufficio per l'Edilizia del Culto* está confiado a la misma persona que tiene el encargo de Secretario de la ORPF. Además de los documentos pontificios –publicados en *AAS* y citados a continuación– he podido disponer de la información amablemente facilitada por Mons. Ernesto Mandara, Secretario de la ORPF y Director del *Ufficio per l'Edilizia di Culto* desde el año 2002 –y, desde el año 2004, Obispo Auxiliar para el sector centro de la Diócesis de Roma– hasta el año 2011, en que ha sido nombrado Obispo de la Diócesis Suburbicaria de Sabina-Poggio Mirteto. Durante su mandato ha seguido directamente la construcción de aproximadamente 50 nuevas iglesias y centros parroquiales en Roma.

8.1. *Origen y desarrollo de la ORPF*

Instituida en 1930, con el nombre de *Pontificia Opera per la Preservazione della Fede e la provvista di nuove Chiese in Roma*, por el Papa Pío XI⁶⁰, que transformó y amplió la *Opera Praeservationis Fidei* –fundada por el Papa León XIII en 1902, para la conservación de la fe en la ciudad de Roma⁶¹–, añadiendo la función de erigir nuevas iglesias, dotándola de personalidad jurídica⁶² y haciéndola depender directamente del Sumo Pontífice.

El mismo Pío XI estableció que el Presidente efectivo sería un Cardenal por él nombrado –distinto del Cardenal Vicario General para Roma, pero con el cual se mantendría en continua relación–, que debería referir directamente al Romano Pontífice y sería el representante de la nueva *Opera* para todos los efectos jurídicos y administrativos. También estableció que estuviera dividida en dos secciones con objetivos distintos pero estrechamente coordinados: la primera, encargada de la «preservación de la fe»; la segunda, encargada de la «provisión de iglesias principalmente, aunque no exclusivamente, parroquiales». A través de su segunda sección, la nueva *Opera* tenía como misión proceder, «tan pronto como fuera posible, a la erección, institución y dotación de nuevas parroquias, también mediante la desmembración, si fuera necesario, de las antiguas, a la adquisición de las áreas, a la construcción de iglesias y edificios anejos, así como a las prácticas necesarias ante las Autoridades civiles»⁶³. Como manifestación de la amplitud de competencias que el Romano Pontífice atribuyó a la nueva *Opera*, destaca la capacidad de «tratar y concluir con las mismas Autoridades las modalidades y las compensaciones por la cesión de antiguas iglesias, de las que fuera necesaria la demolición, para la ejecución de obras de utilidad pública»⁶⁴. Asimismo el Papa establecía que él mismo destinaría a la nueva *Opera* las sumas necesarias para alcanzar sus fines, dedicando también a la erección de nuevas iglesias y parroquias las sumas obtenidas me-

⁶⁰ Pío XI, Motu Proprio *In allocutione* de Novo Opere in locum Leoniani Operis de Fidei Praeservatione sufficiendo, 5 agosto 1930, en AAS 22 (1930) 337-340.

⁶¹ LEÓN XIII, Motu Proprio *Litteras ante annos* quo instituitur consilium pro opere conservationis fidei, 25 noviembre 1902, en ASS 35 (1902-1903) 265-266. Como se indica en el mismo título del Motu Proprio, León XIII instituyó una Comisión Cardenalicia, compuesta por cinco miembros, con la función de moderar y promover la *Opera Praeservationis Fidei* (cfr. *ibidem*, 266).

⁶² Personalidad jurídica que fue reconocida civilmente mediante Real Decreto del 4 de diciembre de 1930.

⁶³ Pío XI, Motu Proprio *In allocutione*, cit., 339.

⁶⁴ *Ibidem*.

dian­te la cesión de antiguas iglesias o mediante donativos de los fieles. Tam­bién se establecía, finalmente, que para la construcción de nuevas iglesias, el Cardenal Presidente contaría con la ayuda de una Comisión, de la que formarían parte, además de un párroco urbano y otros eclesiásticos que el Papa considerara oportuno, un abogado y tres técnicos nombrados todos ellos por el Papa⁶⁵.

En 1989, teniendo en cuenta los cambios verificados desde la fundación en 1930 de la *Opera Pontificia*, que aconsejaban darle una nueva configuración jurídica, el Papa Juan Pablo II la transformó en ente diocesano y le dio su nombre actual⁶⁶. Concretamente estableció que tal *Opera*, con personalidad jurídica pública (cfr. c. 116 CIC), pasara bajo la inmediata y directa jurisdicción del Cardenal Vicario General para la Ciudad de Roma y su Distrito, que sería según derecho su Presidente y su representante legal, y tuviera un Consejo de Administración según los propios estatutos⁶⁷.

8.2. Configuración jurídica y *modus operandi* de la ORPF

Conforme a los estatutos de la ORPF, predispuestos bajo forma de «ates­tado» del Ordinario de la Diócesis de Roma el 30 de abril de 1990⁶⁸, el Cardenal Vicario, Presidente de la ORPF, cuenta con la colaboración de un Secretario, de un Consejo de Administración con funciones consultivas y de una Comisión para la construcción de nuevas iglesias⁶⁹. Desde el punto de vista operativo, para perseguir sus fines institucionales, la ORPF se sirve del *Ufficio per l'Edilizia di Culto* del Vicariato de Roma, que tiene una estructura interna equiparable a la que tenía la Comisión para la construcción ya prevista por el Motu Proprio de 1930, y cuyo Director es la misma persona que tiene el encargo de Secretario de la ORPF⁷⁰.

El Secretario de la ORPF provee a la administración ordinaria en virtud de un poder [en italiano: *procura*] notarial conferido por el Cardenal Presidente. Al mismo Secretario le han sido conferidos otros cuatro poderes para

⁶⁵ Cfr. *ibidem*.

⁶⁶ JUAN PABLO II, Litterae Apostolicae Motu Proprio datae *I mutamenti* quibus organismo vulgo «Pontificia Opera per la preservazione della Fede e per la provvista di nuove Chiese in Roma» nova denominatio et ordinatio datur, 1 julio 1989, en AAS 82 (1990) 1510-1511.

⁶⁷ Cfr. *ibidem*, 1510.

⁶⁸ Vid. Anexo 11. *Estatutos de la ORPF*.

⁶⁹ Cfr. *Statuto dell'ORPF*, arts. 3-4.

⁷⁰ Cfr. *Appunto* del Secretario de la ORPF, *pro manuscripto*.

que pueda intervenir en actos de naturaleza dispositiva que se repiten con mucha frecuencia; en particular:

- para la suscripción de actos de vínculo de destinación de uso por veinte años en favor de la CEI sobre los complejos parroquiales de nueva construcción que han sido edificados con la contribución del «8 por mil»;
- para la suscripción de todos los actos necesarios para la concesión de áreas en el subsuelo de zonas parroquiales para la realización de aparcamientos;
- para la suscripción de actos de concesión de la disponibilidad de espacios de propiedad del la ORPF para la colocación temporal de antenas para telecomunicaciones;
- para la suscripción de actos relativos a contratos de concesión de obras⁷¹.

En relación específica con la financiación de la CEI para la construcción de nuevas iglesias, el Director del *Ufficio per l'Edilizia di Culto*, en calidad de Encargado diocesano para la *edilizia di culto*, predispone las correspondientes solicitudes que son firmadas por el Ordinario diocesano⁷².

En definitiva, y esto es quizá el dato más importante, según declaración de su Secretario, «característica fundamental de la ORPF, que por otra parte constituye el elemento distintivo respecto a las demás Diócesis italianas, es la de operar directamente con terceros (instituciones y privados) en cuanto Ente institucionalmente encargado por la Diócesis para la provisión de nuevas parroquias en todas las fases de la edificación, desde la identificación de las áreas hasta la completa ejecución de los trabajos. Además, estando dotada de personalidad jurídica y, por tanto, de plena autonomía patrimonial, la misma ORPF permanece como propietaria de los complejos parroquiales realizados»⁷³.

⁷¹ En todo lo que no está contenido en los citados poderes, y teniendo en cuenta la naturaleza de los actos que deban realizarse, el Cardenal Presidente confiere poderes *ad hoc* al Secretario (cfr. *ibidem*).

⁷² Desde el año 2008 las prácticas para acceder a esta financiación están completamente informatizadas, dotando al Ordinario diocesano y al Encargado diocesano para la *edilizia di culto* de certificados digitales (cfr. *ibidem*).

⁷³ *Ibidem*.

Anexos*

Anexo 1. *El acceso a las iglesias*

L'ACCESSO NELLE CHIESE

1. Secondo la tradizione italiana, è garantito a tutti l'accesso gratuito alle chiese aperte al culto, perché ne risalti la primaria e costitutiva destinazione alla preghiera liturgica e individuale. Tale finalizzazione è tutelata anche dalle leggi dello Stato.

2. La Conferenza Episcopale Italiana ritiene che tale principio debba essere mantenuto anche in presenza di flussi turistici rilevanti, consentendo l'accesso gratuito nelle chiese nelle fasce orarie tradizionali, salvo casi eccezionali a giudizio dell'Ordinario diocesano. Pertanto le comunità cristiane si impegnano ad assicurare l'apertura delle chiese destinate al culto, in special modo quelle di particolare interesse storico e artistico situate nei centri storici e nelle città d'arte, sulla base di calendari e orari certi, stabili e noti.

3. Le comunità cristiane accolgono nelle chiese come ospiti graditi tutti coloro che desiderano entrarvi per pregare, per sostare in silenzio, per ammirare le opere d'arte sacra in esse presenti.

4. Ai turisti che desiderano visitare le chiese, le comunità cristiane chiedono l'osservanza di alcune regole riguardanti l'abbigliamento e lo stile di comportamento e soprattutto il più rigoroso rispetto del silenzio, in modo da facilitare il clima di preghiera: anche durante le visite turistiche, infatti, le chiese continuano a essere «case di preghiera».

5. In presenza di flussi turistici molto elevati gli enti proprietari, allo scopo di assicurare il rispetto del carattere sacro delle chiese e di garantire la visita in condizioni adeguate, si riservano di limitare il numero di persone che vengono accolte (ricorrendo al cosiddetto contingentamento) e/o di limitarne il tempo di permanenza.

6. Deve essere sempre assicurata la possibilità dell'accesso gratuito a quanti intendono recarsi in chiesa per pregare e deve essere sempre consentito l'accesso gratuito ai residenti nel territorio comunale.

7. L'adozione di un biglietto d'ingresso a pagamento è ammissibile soltanto per la visita turistica di parti del complesso (cripta, tesoro, battistero autonomo, campanile, chiostro, singola cappella, ecc.), chiaramente distinte dall'edificio principale della chiesa, che deve rimanere a disposizione per la preghiera.

Roma, 31 gennaio 2012

Memoria di San Giovanni Bosco

IL CONSIGLIO PERMANENTE
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

* Los formularios contenidos en los Anexos 3-10 están tomados de la página web de *Quaderni di diritto ecclesiale* (www.quadernididirittoecclesiale.org).

Anexo 2. Reglamento diocesano sobre el sonido de las campanas

REGOLAMENTO DIOCESANO SUL SUONO DELLE CAMPANE

Il significato del suono delle campane è delineato nel n. 1455 del *Benedizionale*: «Risale all'antichità l'uso di ricorrere a segni o a suoni particolari per convocare il popolo cristiano alla celebrazione liturgica comunitaria, per informarlo sugli avvenimenti più importanti della comunità locale, per richiamare nel corso della giornata a momenti di preghiera, specialmente al triplice saluto alla Vergine Maria. La voce delle campane esprime dunque in certo qual modo i sentimenti del popolo di Dio quando esulta e quando piange, quando rende grazie o eleva suppliche, e quando, riunendosi nello stesso luogo, manifesta il mistero della sua unità in Cristo Signore».

Da tempo immemorabile l'uso delle campane è espressione culturale della comunità ecclesiale, strumento di richiamo per le celebrazioni liturgiche e per altre manifestazioni della pietà popolare, nonché segno che caratterizza momenti significativi della vita della comunità cristiana e di singoli fedeli. Esso rientra nell'ambito della libertà religiosa, secondo la concezione propria della Chiesa cattolica e gli accordi da essa stipulati con la Repubblica italiana. Come tale, la Chiesa intende tutelarla e disciplinarla in modo esclusivo, con attenzione alle odierne condizioni sociali.

Anche nella nostra diocesi si rende opportuna una regolamentazione del suono delle campane, che ne salvaguardi le caratteristiche tipicamente religiose nel rispetto delle attuali esigenze della popolazione.

Pertanto con il presente atto

Decretiamo

che nella nostra diocesi si osservino le seguenti disposizioni:

1. Il suono delle campane è consentito solo per i seguenti scopi:

- indicare le celebrazioni liturgiche e le altre manifestazioni di preghiera e di pietà popolare;
- essere segno, in particolari circostanze, che accompagna le suddette celebrazioni;
- scandire i momenti più importanti della vita della comunità cristiana (feste, lutti, ecc.);
- richiamare al mattino, a mezzogiorno e alla sera il saluto a Maria.

Altri utilizzi potranno essere richiesti e consentiti, in via eccezionale, da parte dell'Ordinario del luogo.

2. Il suono delle campane, per gli scopi sopra indicati, è consentito:

- nei giorni feriali dalle ore __ alle ore __ (in città dalle ore __ alle ore __)
- nei giorni festivi dalle ore __ alle ore __ (in città dalle ore __ alle ore __)

Costituiscono eccezione la Veglia pasquale e la Notte di Natale;

3. Gli orari indicati nel n. 2 devono essere rispettati anche per gli eventuali rintocchi dell'orologio campanario, qualora il suo utilizzo sia di competenza della pa-

rocchia o di altro ente ecclesiastico a cui spetta l'ufficiatura dell'edificio di culto. I rintocchi dovranno essere limitati alle ore o, al più, alle mezz'ore, e non essere ripetuti.

4. La durata del suono per l'avviso delle celebrazioni liturgiche non deve mai superare i __ minuti (__ minuti in città), con eccezione delle solennità, in cui non si dovrà però superare la durata di __ minuti (__ per la città). La durata del suono per altri scopi (per l'*Angelus* o in occasione di particolari solennità, della festa patronale, della morte di un fedele, ecc.) non deve comunque superare quella tradizionale ed essere ispirata a criteri di moderazione.

5. L'intensità del suono deve essere, se possibile (agendo per esempio sull'eventuale amplificazione), regolata in modo tale che, con attenzione al contesto ambientale in cui l'edificio di culto è inserito, le campane mantengano la funzione di segno (siano quindi percepibili da parte dei fedeli), ma non siano fonte di disturbo;

6. Le presenti disposizioni si applicano, per quanto possibile, anche quando il suono è riprodotto mediante strumenti meccanici o elettronici.

Dato a _____ il _____

Il Vescovo diocesano

Il Cancelliere vescovile

Anexo 3. *Licencia para la construcción de una iglesia*

CONCESSIONE DELLA LICENZA PER LA COSTRUZIONE DI UNA
CHIESA

Protocollo n. _____

VISTO la richiesta presentata in data _____ dal/la Rev.do/Rev.da _____, _____ (qualifica ecclesiastica), a nome della parrocchia (dell'istituto religioso, della società di vita apostolica, della cappellania, ...) _____, intesa a ottenere la costruzione di una nuova chiesa nella parrocchia di _____, comune di _____, via _____;

UDITI, a norma del c. 1215 § 2 CIC, il Consiglio presbiterale in data _____ (cfr. c. 495 § 1 CIC) e i rettori delle chiese viciniori;

RITENENDO che la nuova chiesa potrà servire al bene delle anime;

VERIFICATO che non mancheranno i mezzi necessari per la sua costruzione e per il culto divino;

SENTITO il parere espresso dall'ufficio liturgico (commissione liturgica, commissione di arte sacra, commissione nuove chiese, ...), a ciò da Noi deputato, in data _____;

AI SENSI del c. 1215 CIC

con il presente atto
concediamo Licenza

perché venga costruita una nuova chiesa a _____, nella parrocchia di _____, in via _____.

Nella costruzione della chiesa si osserveranno le indicazioni date dall'ufficio liturgico

(commissione liturgica, commissione di arte sacra, commissione nuove chiese, ...).

Compiuta opportunamente la costruzione la nuova chiesa sarà quanto prima dedicata (benedetta) con rito solenne secondo le leggi della sacra liturgia e le verrà assegnato un titolo proprio (cfr. cc. 1217-1218 CIC).

Luogo e Data _____

L.S.

Il (L'Arci)vescovo

Il cancelliere (arci)vescovile

Anexo 4. *Licencia para la constitución de un oratorio*

CONCESSIONE DELLA LICENZA PER LA COSTITUZIONE DI UN
ORATORIO

Protocollo n. _____
VISTO la richiesta presentata in data _____ dal/la Rev.do/Rev.da
_____, _____ (qualifica ecclesiastica), intesa
a ottenere che il luogo meglio descritto nell'acclusa documentazione fotografica e si-
tuato nella struttura denominata _____ sia costituito in oratorio;

PRESO ATTO del parere espresso dal Parroco e dal Vicario foraneo competenti
per territorio;

SENTITO il parere espresso dall'Ufficio liturgico, a ciò da Noi deputato, sulla
base dell'ispezione a detto luogo effettuata in data _____;

AI SENSI dei cc. 1223 e 1225 CIC

con il presente atto
concediamo Licenza

affinché l'ambiente di cui in premessa _____ sia destinato al culto
divino quale Oratorio.

Contestualmente, diamo mandato al nostro Vicario generale (o Vicario Episco-
pale) di provvedere, ai sensi del c. 1229 CIC, alla benedizione del suddetto luogo,
avendo altresì cura di redigere in duplice copia il relativo documento (cfr. cc. 1207-
1208 CIC).

Una volta benedetto (cfr. c. 1229 CIC), l'Oratorio dovrà essere considerato un
luogo sacro riservato unicamente al culto divino e non potrà essere convertito ad usi
profani senza l'autorizzazione di questo ordinariato (cfr. c. 1224 § 2 CIC).

La celebrazione di S. Messe nell'Oratorio dovrà avvenire nel rispetto dei diritti
della Parrocchia in cui esso si trova, della normativa universale e di quella diocesana.
Per la celebrazione degli altri atti di culto si osservino le disposizioni del diritto.

Luogo e Data _____

L.S.

Il (L'Arci)vescovo

Il cancelliere (arci)vescovile

Anexo 5. *Licencia para la constitución de una capilla privada*

CONCESSIONE DELLA LICENZA PER LA COSTITUZIONE DI UNA
CAPPELLA PRIVATA

Protocollo n. _____

Vista la richiesta presentata in data _____ dal/la Sig./Sig.ra _____, intesa ad ottenere la licenza per destinare il luogo denominato _____, meglio descritto nell'acclusa documentazione planimetrica e fotografica e di sua proprietà, a cappella privata (con possibilità di celebrazione della S. Messa o di altre funzioni sacre), con riserva unicamente al culto ed esclusione di qualsiasi uso domestico (cfr. c. 1229 CIC);

vista la lettera del parroco territorialmente competente in data _____;

sentito il parere del competente Vicario foraneo;

con il presente atto
decretiamo e concediamo

- che l'edificio (l'ambiente) indicato in premessa sia destinato a Cappella privata, ai sensi del c. 1226 CIC, con riserva unicamente al culto ed esclusione di qualsiasi uso domestico (cfr. c. 1229 CIC);
- (eventualmente) che in detto edificio (ambiente) si possano celebrare la S. Messa o le altre funzioni sacre (cfr. c. 1228 CIC), salvi i diritti della Parrocchia di _____ e nel rispetto della normativa canonica universale e quella vigente in questa (Arci)diocesi, in particolare _____¹.
- (eventualmente) che in detto edificio (ambiente) si possa custodire l'Eucaristia (cfr. c. 934 § 1 CIC).

Diamo mandato al nostro Vicario generale (o Vicario episcopale territorialmente competente) di benedire il suddetto edificio (ambiente) (cfr. c. 1229 CIC) e di redigere in duplice copia il relativo documento (cfr. c. 1208 CIC).

Luogo e Data _____

L.S.

Il (L'Arci)vescovo

Il cancelliere (arci)vescovile

¹ Per esempio: «non è consentita nella cappella la celebrazione di matrimoni,»; ...; «si chiedi licenza all'Ordinario del luogo per la celebrazione di matrimoni (cfr. c. 1118 CIC)».

Anexo 6. *Autorización para reservar la Santísima Eucaristía*

AUTORIZZAZIONE A CONSERVARE IL S. SACRAMENTO

Protocollo n. _____

VISTA l'istanza presentata in data _____, da _____, (qualifica del richiedente: cappellano, superiore) _____ intesa ad ottenere l'autorizzazione a conservare il SS. Sacramento nell'Oratorio (chiesa, cappella privata, ...) situato nella casa _____ (nome della comunità o della casa), nel territorio della Parrocchia di _____;

SENTITO il delegato vescovile per la liturgia e il Parroco del luogo in cui sorge il luogo sacro indicato;

PRESO ATTO del parere espresso dall'Ufficio Liturgico, dopo il sopralluogo effettuato in data _____;

VISTI i cc. 934, 936 e 938 CIC;

con il presente atto
concediamo l'autorizzazione richiesta

precisando che:

- a) almeno due volte al mese, se possibile, vi si celebri la S. Messa (cfr. c. 934 § 2 CIC);
- b) giorno e notte risplenda la speciale lampada davanti alla S. Eucaristia (cfr. 940 CIC);
- c) venga custodita con particolare cura la chiave del Tabernacolo (cfr. c. 938 § 5 CIC);
- d) le ostie consacrate devono essere rinnovate di frequente (cfr. c. 939 CIC);
- e) siano osservate le altre prescrizioni delle leggi ecclesiastiche riguardanti la custodia e il culto del SS.mo Sacramento.

Salvi i diritti parrocchiali.

Il presente Decreto avrà la durata di _____ (per esempio un quinquennio), al termine del quale si dovrà rinnovare la richiesta.

Luogo e Data _____

L.S.

L'Ordinario del luogo

Il cancelliere (arci)vescovile

Anexo 7. *La dispensa para la sepultura en una iglesia*

DISPENSA PER LA TUMULAZIONE IN UNA CHIESA

Vista la richiesta presentata in data _____ dal Rev.do _____, Parroco della parrocchia di _____, con sede in _____, nel Comune di _____ intesa a ottenere il permesso per seppellire in detta chiesa le spoglie mortali di _____;

PRESO ATTO delle motivazioni addotte nella richiesta;

VISTO il disposto dei cc. 87 § 1 e 1242 CIC

con il presente atto
DISPENSIAMO

dalla norma stabilita dal c. 1242 CIC

e AUTORIZZIAMO

la tumulazione nella suddetta Chiesa (Parrocchiale) di _____ le spoglie mortali del defunto _____ nel sepolcro _____¹

Luogo e Data _____

L.S.

Il (L'Arci)vescovo

Il cancelliere (arci)vescovile

¹ Si precisi la collocazione del sepolcro, eventuali indicazioni in merito alla sua costruzione rimandando, se del caso, ad ulteriori autorizzazioni necessarie.

Anexo 8. Decreto de erección de un santuario diocesano

EREZIONE DI UN SANTUARIO DIOCESANO

Protocollo n. _____

La chiesa di _____, collocata nella nostra diocesi, nel territorio della parrocchia di _____, è divenuta un punto di riferimento spirituale e un luogo di pellegrinaggio.

Infatti _____ (breve cronistoria delle vicende della chiesa che hanno contribuito a renderla un luogo di pellegrinaggi e un centro di vita spirituale).

Desiderando dunque dare un assetto canonico alla chiesa che ne evidenzi il carattere di luogo di pellegrinaggio e punto di riferimento spirituale, sentito il vicario foraneo;

visti i cc. 1230-1234 CIC

erigiamo

la suddetta chiesa in Santuario diocesano «_____» con sede in _____.

Approviamo inoltre lo *statuto del Santuario diocesano* «_____» nel testo allegato al presente decreto.

Luogo e Data _____

L.S.

Il (L'Arci)vescovo

Il cancelliere (arci)vescovile

Anexo 9. *Estatutos de un santuario diocesano*

STATUTO DI UN SANTUARIO DIOCESANO

Art. 1. Il Santuario diocesano «_____» è un luogo di pellegrinaggi e di riferimento spirituale per i fedeli della diocesi di _____, perché _____ (breve spiegazione storica). Il Santuario ha sede in _____, via _____ n° __, nel territorio della parrocchia _____.

Art. 2. Il Santuario diocesano «_____» è luogo di preghiera e di pietà popolare. In esso i fedeli possono trovare con maggior abbondanza occasioni di preghiera, di ascolto della Parola di Dio, di celebrazione dei Sacramenti, in particolare, dell'Eucaristia e della Riconciliazione, di catechesi, di iniziative di carità cristiana. In base alla vigente legislazione universale e alle disposizioni dell'*Enchiridion indulgentiarum* potranno acquistare l'indulgenza plenaria, alle consuete condizioni, i fedeli che visiteranno il Santuario in occasione _____ («della memoria liturgica del beato»; «una volta all'anno in un giorno scelto dal singolo fedele»; «di un pellegrinaggio collettivo», «...»). (Sempre che, evidentemente, le indulgenze siano state concesse dalla competente autorità a norma del c. 995 CIC).

Art. 3. Il rettore del Santuario è un sacerdote nominato dal Vescovo diocesano (è un sacerdote presentato dal Superiore generale o provinciale della Congregazione _____ e nominato a tale incarico dal Vescovo diocesano [cfr. cc. 557 § 2 e 682 § 1 CIC]). A lui spetta la cura liturgica, pastorale e amministrativa del Santuario. Ha la legale rappresentanza di esso e ha i compiti previsti dai cc. 556-563 e 1230-1234 CIC («Collaborano con il Rettore, stabilmente o saltuariamente, altri confratelli presenti nella Casa Madre»). Potrà essere rimosso dal suo ufficio a norma del c. 563 CIC.

Art. 4. Nel Santuario si svolgono tutte le celebrazioni liturgiche e di pietà popolare, eccetto quelle propriamente parrocchiali, destinate a offrire al popolo di Dio occasioni di preghiera e di vera conversione.

L'orario delle Sante Messe e di altre funzioni liturgiche domenicali andrà concordato, sotto la responsabilità del vicario foraneo, con i Parroci delle parrocchie vicine.

Di norma nel Santuario non si celebrano matrimoni.

Art. 5. Il Santuario diocesano _____ è inserito nel complesso immobiliare costituito da: _____ ed ha a disposizione per le sue attività, oltre all'edificio di culto: l'abitazione del rettore, i locali per la catechesi e gli incontri, i locali per l'accoglienza dei pellegrini; _____. La proprietà dei suddetti immobili è _____ («della Diocesi di _____»; «del Comune di _____»; «....») e l'utilizzo è regolato da apposita convenzione sottoscritta dall'Ordinario diocesano con l'ente proprietario.

Art. 6. Il rettore del Santuario, nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante dell'ente, può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria ammi-

nistrazione nel rispetto delle autorizzazioni canoniche stabilite (e delle eventuali disposizioni dei Superiori della Congregazione).

Art. 7. Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme canoniche e civili vigenti in materia.

Luogo e Data _____

L.S.

Il (L'Arci)vescovo

Il cancelliere (arci)vescovile

Anexo 10. *Acuerdo entre una diócesis y un instituto religioso para encomendar una iglesia rectoral*

CONVENZIONE TRA DIOCESI E ISTITUTO RELIGIOSO PER L'AFFIDAMENTO DI UNA RETTORIA (CON ANNESSA MISSIO CUM CURA ANIMARUM PER MIGRANTI)

Protocollo n. _____

Art. 1. Il Vescovo diocesano di _____ affida alla Provincia religiosa della Congregazione «_____» la quale a norma delle proprie Costituzioni accetta, nella persona del Superiore competente - la cura pastorale della chiesa _____, sita in _____, nella situazione di diritto e di fatto in cui essa oggi si trova.

Art. 2. § 1. Il Superiore si impegna a destinare alla chiesa un sacerdote a tempo pieno come rettore, nella persona del religioso membro della Congregazione [a cui sarà conferito contemporaneamente l'ufficio di cappellano responsabile della Missione con cura d'anime dei migranti _____ (per esempio: latinoamericani di lingua spagnola e portoghese,...), presentandolo per l'istituzione all'Ordinario diocesano]. Resta ferma la possibilità del Superiore competente di destinare liberamente al servizio della chiesa altri religiosi sacerdoti, anche a tempo parziale, senza inserimento nel sistema del sostentamento del clero, semplicemente dandone avviso all'Ordinario diocesano.

§ 2. I religiosi destinati alla cura pastorale della chiesa sono considerati in senso pieno appartenenti all'Istituto religioso e risiederanno presso la comunità _____ costituita in casa autonoma, con sede nelle pertinenze annesse alla chiesa.

§ 3. I religiosi destinati alla cura pastorale della chiesa esercitano il loro ministero in armonia con la pastorale diocesana, in fraterna collaborazione con la parrocchia territoriale, con la propria comunità religiosa e coi clero diocesano, nello spirito e con lo stile proprio del carisma del loro Istituto. La loro immissione ed il loro trasferimento sono regolati dalle Costituzioni dell'Istituto, salvo quanto stabilito dall'articolo successivo.

§ 4. I religiosi destinati alla cura pastorale della chiesa, fatto salvo quanto impone la loro peculiare condizione, hanno gli stessi obblighi e gli stessi diritti dei presbiteri diocesani, sia nella conduzione della pastorale della Chiesa sia nell'amministrazione dei beni, nel rispetto delle norme canoniche e del diritto proprio.

Art. 3. § 1. L'istituzione e la rimozione del rettore della chiesa avvengono a norma del c. 682 CIC, nel rispetto dei principi enunciati all'art. 2 § 1 della presente convenzione.

§ 2. L'esercizio del ministero dei religiosi è regolato a norma del c. 678 CIC.

§ 3. L'avvicendamento dei religiosi nell'ufficio di rettore avviene mediante consegna amministrativa, alla presenza di un delegato del Vescovo, secondo le procedure vigenti nella diocesi di _____.

§ 4. Le parti convengono che la remunerazione del rettore, addetto a tempo pieno alla cura della Chiesa, sarà conforme a quanto disposto dalle norme per il sostentamento del clero deliberate dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 4. § 1. La chiesa, posta sotto la vigilanza dell'Ordinario diocesano, è persona giuridica distinta dalla casa dell'istituto religioso cui è affidata.

[§ 2. La stessa chiesa è sede della Missione con cura d'anime dei migranti _____, istituita con decreto del Vescovo diocesano, Prot. N. _____ in data _____ e successive modifiche].

Art. 5. § 1. La chiesa è retta dal rettore che ha la responsabilità dell'edificio sacro e dei locali annessi, del culto e della pastorale di accoglienza di tutti i fedeli, da armonizzare col servizio specifico cui la chiesa è destinata, nel rispetto del programma pastorale diocesano, secondo le direttive dell'Ordinario diocesano, cui risponde personalmente fermo restando il disposto del c. 678 CIC.

§ 2. Qualsiasi eventuale utilizzo della chiesa e dei locali annessi per attività non immediatamente riconducibili alle finalità di religione o di culto - ma comunque consona alla funzione e alla dignità del luogo - deve avvenire nel rispetto anche del diritto particolare della Diocesi di _____ o - a seconda dei casi - deve essere specificamente autorizzato dall'Ordinario diocesano.

Art. 6. La presenza dell'Istituto religioso nella compagine diocesana costituisce un arricchimento per la Diocesi di _____. I religiosi esprimono la loro identità carismatica con la testimonianza della loro vita, restando fedeli allo spirito dell'istituto e dando un'attenzione privilegiata alla carità spirituale e materiale, (nonché all'offerta di adeguata accoglienza e di occasioni formative ai migranti _____, secondo le finalità proprie della Missione).

Art. 7. § 1. La chiesa è amministrata dal rettore.

§ 2. L'amministrazione della chiesa è nettamente distinta da quella della Casa religiosa (e anche, per quanto è possibile, da quella della Missione con cura d'anime di cui è sede). È tenuta a norma dei cc. 1284 § 3 e 1278 CIC, nonché secondo le norme della Diocesi di _____ riguardanti l'amministrazione delle chiese non parrocchiali, con relativo obbligo di presentazione del rendiconto (bilancio) annuale, e sempre salvo il potere di vigilanza del Superiore maggiore a norma del diritto.

Art. 8. § 1. Le parti si danno atto reciprocamente che la chiesa ed il complesso rettoriale sono di proprietà di _____.

§ 2. I beni mobili ad essi pertinenti, eccetto quelli imputati a soggetti diversi nell'inventario dei beni storici-artistici allegato alla presente convenzione, sono di proprietà di _____.

§ 3. L'acquisizione di eventuali beni mobili futuri sarà soggetta a verifica concordata tra la Provincia religiosa della Congregazione _____ e Diocesi di _____, con integrazione dell'inventario di cui sopra.

Art. 9. § I. Tutte le offerte raccolte in chiesa in occasione dell'attività pastorale ordinaria competono a _____ (a favore della comunità dei

migranti _____ competono alla Missione), a meno che non consti anche dalle semplici circostanze una diversa intenzione del donante. È dovere del rettore, quando le circostanze lo richiedano, di verificare l'intenzione del donante.

§ 2. Sono a carico dell'amministrazione (della Missione e) dell'ente chiesa le spese di manutenzione ordinaria della chiesa stessa e dei locali annessi, così come previsto dalla normativa e dalla prassi vigente.

Art. 10. Gli atti di amministrazione straordinaria devono essere autorizzati preventivamente dalla competente autorità ecclesiastica.

Art. 11. L'affidamento della cura pastorale della chiesa, fatto all'Istituto religioso e non al rettore come persona fisica, è convenuto a tempo indeterminato, con decorrenza dal _____, (ed è vincolato alla destinazione della medesima chiesa a sede della Missione con cura d'anime _____).

Luogo e Data _____

L.S.

Il (L'Arci)vescovo

L.S.

Il Superiore Provinciale

Il cancelliere (arci)vescovile

Anexo 11. *Estatutos de la ORPF*

Roma, 30 aprile 1990

VICARIATO DI ROMA
450/90

L'ORDINARIO DELLA DIOCESI DI ROMA

attesta

che *L'OPERA ROMANA PER LA PRESERVAZIONE DELLA FEDE E LA PROVVISITA DI NUOVE CHIESE IN ROMA*, con sede in Roma Piazza S. Giovanni in Laterano n. 6/a, già denominata Pontificia Opera per la Preservazione della Fede e la provvista di Nuove Chiese in Roma, canonicamente eretta con Motu Proprio di S.S. Papa Pio XI del 5 agosto 1930, riconosciuta civilmente con R.D. del 4 dicembre 1930 e iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Roma il 3 giugno 1987 al n. 867/87, è retta dalle seguenti norme statutarie:

Art. 1. L'Opera Romana per la preservazione della Fede e la provvista di nuove Chiese in Roma è un Ente ecclesiastico della Diocesi di Roma con sede in Roma.

Art. 2. L'Opera ha come fini istituzionali la provvista delle sedi delle nuove Parrocchie di Roma con la costruzione di nuovi edifici di culto e di complessi parrocchiali o con l'acquisizione in proprietà, o ad altro titolo, di immobili da destinare a centri di culto definitivi o provvisori, e la evangelizzazione della periferia urbana.

Art. 3. L'Opera ha come Presidente, Amministratore unico e Legale Rappresentante il Cardinale Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma. Egli può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art. 4. Il Cardinale Presidente è assistito a norma del c. 1280 CIC da un Consiglio di Amministrazione a titolo consultivo, e dalla Commissione per la costruzione delle nuove Chiese, prevista nel Motu Proprio istitutivo del 5 agosto 1930 e da un ecclesiastico da lui stesso nominato con funzioni di Segretario generale.

Art. 5. Il patrimonio dell'Opera Romana per la preservazione della Fede e la provvista di nuove Chiese in Roma è costituito dai complessi parrocchiali dalla stessa realizzati, anche con le precedenti denominazioni, dalle offerte dei fedeli per tale scopo e da eventuali donazioni, eredità e legati. In caso di estinzione dell'Opera il patrimonio sarà devoluto alla Diocesi di Roma con decreto del Cardinale Vicario, fermo restando il disposto dell'art. 20 della Legge 20 maggio 1985 n. 222, contenente le norme circa gli enti e i beni ecclesiastici in Italia.

Art. 6. Le modifiche delle norme statutarie devono essere approvate con decreto del Cardinale Vicario osservato quanto previsto dall'art. 19 della Legge citata nel precedente articolo.

Art. 7. Per quanto non previsto valgono le norme del diritto canonico e delle Leggi italiane in materia di enti ecclesiastici.

L.S

Bibliografía

- ACQUAVIVA, A., *Gli «edifici» e i «luoghi» del culto tra Stato, Chiesa cattolica e confessioni di minoranza*, Roma 2009.
- BETTETINI, A., *Gli enti e i beni ecclesiastici. Art. 831*, Milano 2005.
- CALVI, M., *L'edificio di culto è un «luogo sacro»? La definizione canonica di «luogo sacro»*, en Quaderni di diritto ecclesiale 13 (2000) 228-247.
- DANEELS, F., *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, en Ius Ecclesiae 10 (1998) 111-148.
- ECONOMI DELLE GRANDI DIOCESI, *La gestione e l'amministrazione della parrocchia*, a cargo de P. Clementi e L. Simoncelli, Bologna 2008.
- FELICIANI, G., *Le chiese nel quadro della tutela del patrimonio culturale*, en AA.VV., *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, a cargo de D. Persano, Milano 2008, 255-269.
- La questione dei ticket d'accesso alle chiese*, en AA.VV., *Studi in onore di Mario Romano*, IV, Napoli 2011, 2809-2816.
- GEFAELL, P., *L'attenzione agli orientali cattolici nei documenti delle Conferenze episcopali*, en Ius Ecclesiae 22 (2010) 367-382.
- MINELLI, C., *La rilevanza giuridica della «Deputatio ad cultum» (art. 831 Codice Civile)*, en AA.VV., *Enti ecclesiastici e controllo dello Stato. Studi sull'Istruzione CEI in materia amministrativa*, a cargo de J.I. Arrieta, Venezia 2007, 257-271.
- MIÑAMBRES, J., *Evoluzione nella prassi amministrativa della Chiesa in Italia: dalla «Istruzione in materia amministrativa» del 1992 a quella del 2005*, en Ius Ecclesiae 18 (2006) 199-216.
- LONGHITANO, A., *Comentario al c. 1205*, en AA.VV., *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, a cargo de A. Marzoa, J. Miras y R. Rodríguez-Ocaña, Pamplona 1996, III, 1796-1800.
- Comentario al c. 1212*, en AA.VV., *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, a cargo de A. Marzoa, J. Miras y R. Rodríguez-Ocaña, Pamplona 1996, III, 1810.
- MARTÍN DE AGAR, J.T., *Comentario al c. 1205*, en AA.VV., *Código de Derecho Canónico. Edición anotada*, a cargo de P. Lombardía y J.I. Arrieta, Pamplona 1984, 722-723.
- MONTINI, G.P., *La cessazione degli edifici di culto*, en Quaderni di diritto ecclesiale 13 (2000) 281-299.
- MOSCONI, M., *Chiesa e chiese: le norme canoniche relative alla costruzione di una nuova chiesa*, en Quaderni di diritto ecclesiale 13 (2000) 248-267.

PETRONCELLI, M., *Edifici di culto cattolico*, en *Enciclopedia del diritto*, XIV, Milano 1965, 297-311.

PIGHIN, B.F., *Configurazione e gestione dei luoghi di culto*, en AA.VV., *Enti ecclesiastici e controllo dello Stato. Studi sull'Istruzione CEI in materia amministrativa*, a cargo de J. I. Arrieta, Venezia 2007, 117-138.

RIVELLA, M., *L'Istruzione in materia amministrativa 2005 della Conferenza Episcopale Italiana*, en *Ius Ecclesiae* 18 (2006) 187-197.

